

UNA REALIDAD QUE NO SE TRANSFORMA:

**Las violencias contra las
mujeres en Buenos Aires, Cauca**

Una realidad que no se transforma: *Las violencias contra las mujeres en Buenos Aires, Cauca*

ISBN 978-958-59543-8-0

Una publicación de la Casa de la Mujer

Bogotá Colombia, enero 2019

Autoras

Casa de la Mujer

Colectivo de Mujeres Trascendiendo, Buenos Aires, Cauca

Corrección de texto y estilo

Casa de la Mujer, Bogotá, D.C

Ilustración y Diagramación

Tonal I Ideas

Publicación financiada por: OXFAM y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Casa de la Mujer y no refleja necesariamente la opinión de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y de OXFAM”.

UNA REALIDAD QUE NO SE TRANSFORMA:

**Las violencias contra las mujeres en Buenos
Aires, Cauca**

UNA PUBLICACIÓN DE:



CON EL APOYO DE:



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



OXFAM





TABLA DE CONTENIDO

Introducción	1
Panorama de Buenos Aires	4
Normatividad nacional a favor de una vida libre de violencias para las mujeres en Colombia	11
Violencias contra las mujeres en el municipio de Buenos Aires	38
Violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y luego de la firma del Acuerdo Final	47
Obstáculos para el acceso a la justicia	61
Recomendaciones	65
Bibliografía	69

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado de la revisión y análisis de varias fuentes de información: 1) datos y cifras oficiales otorgados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Plan de Desarrollo Municipal de Buenos Aires *Construyendo con la gente para la gente, 2016-2019*; 2) páginas web de medios de comunicación y de organizaciones defensoras de derechos humanos, 3) experiencias y percepciones de las mujeres que hacen parte de los procesos que acompaña la Casa de la Mujer y el Colectivo Mujeres Trascendiendo¹, sobre la seguridad en los territorios y las transformaciones en las relaciones sociales desde el inicio del proceso de implementación del Acuerdo final; y 4) respuestas a derechos de petición enviados a autoridades municipales y departamentales. De esta última fuente, cabe mencionar que fueron enviados derechos de petición a las siguientes entidades: Comisaría de Familia, al Juzgado Municipal 001 Promiscuo, Estación de Policía y Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Buenos Aires; Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Comisaría de Familia en Santander de Quilichao; y la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la seccional municipal de la Fiscalía General de la Nación de Popayán. Sin embargo, solo dieron respuesta la Personería Municipal de Popayán, la Comisaría de Familia de Santander de Quilichao y el Juzgado Promiscuo de Buenos Aires.

La elaboración de presente informe, se llevó a cabo en el marco del proyecto *“Mujeres afrodescendientes liderando la construcción de la paz en Colombia, estrategia local para la reconciliación y la paz*

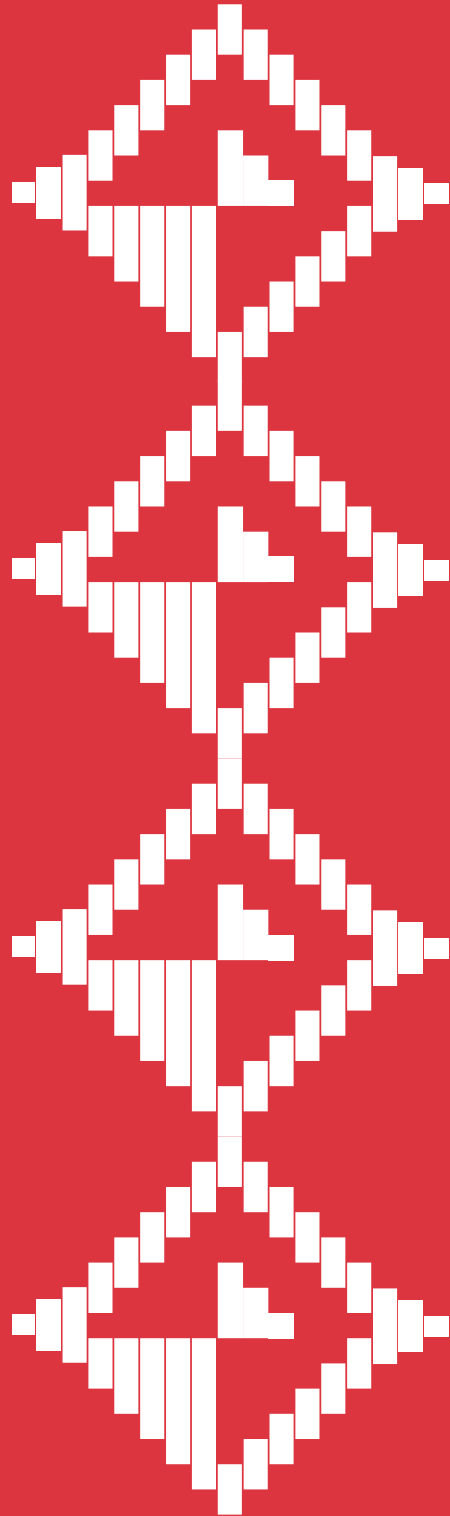
1. Esta información fue recolectada por el Colectivo Mujeres Trascendiendo y la Casa de la Mujer por medio de un instrumento cualitativo.

territorial”, el cual es apoyado por OXFAM y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), con el ánimo de dar cuenta que sobre las mujeres de Buenos Aires se han cernido múltiples violencias y aún se presentan situaciones de riesgo contra ellas. Las mujeres han vivido y han sido testigos de cómo se cometen vejámenes contra los cuerpos femeninos, por ser considerados disponibles y de uso para los otros, quienes en su mayoría son varones. Las violencias contra las mujeres permean todos los espacios sociales, así como las diferentes etapas vitales de ellas. Es en los cuerpos de las mujeres, en sus relatos, en sus voces y en sus proyectos de vida, que se ven frustrados por las violencias, que se encuentran los impactos y efectos de estas; estamos ante una realidad que no se transforma porque: a) persisten imaginarios sociales que las sostienen y las naturalizan, b) el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizarles medidas efectivas de prevención, protección, sanción y garantías de no repetición, para que puedan vivir libres de violencias, y c) en el conflicto armado dichas violencias se exacerban. No obstante, las mujeres no han sido sujetos pasivos, son múltiples las acciones

de resistencia, transformación, así como las estrategias de protección que han desplegado para sí y para otras mujeres; en este sentido, el Colectivo Mujeres Transcendiendo y la Casa de la Mujer, esperamos que este informe sea de utilidad para las mujeres de Buenos Aires en su exigencia a una vida libre de violencias y para que las autoridades locales se comprometan decididamente en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, como un paso necesario para consolidar la paz en el municipio.

La estructura del documento es la siguiente: el primer apartado Panorama de Buenos Aires presenta una mirada general del municipio y de la configuración de las dinámicas del conflicto armado en este; el segundo Normatividad nacional a favor de una vida libre de violencias para las mujeres en Colombia es una síntesis de la normatividad nacional en materia de prevención, atención, investigación, sanción y garantías de no repetición para hacer frente a la violencia contra las mujeres; en el tercero Violencias contra las mujeres en el municipio de Buenos Aires encontraremos las cifras oficiales que dan cuenta del panorama actual al que

se enfrentan las mujeres del municipio; en el cuarto Violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y luego de la firma del Acuerdo Final se continúa con el análisis de cifras oficiales y se da un lugar las voces de las mujeres de cara a las percepciones que tienen en materia de seguridad y de transformación de las relaciones sociales; el quinto Obstáculos para el acceso a la justicia presenta una serie de limitantes en materia de justicia para las mujeres víctimas de violencias, y finalmente; en el sexto apartado se formulan Recomendaciones dirigidas a las autoridades de nivel nacional y local.



PANORAMA DE BUENOS AIRES

1. Contexto espacial y socio-demográfico:

Buenos Aires se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, tiene una extensión de 410 km² con gran biodiversidad ya que es uno de los tres municipios que conforman el valle geográfico del río Cauca hacia el margen de la cordillera occidental y también con zona de montaña. El municipio limita al oriente con el municipio de Santander de Quilichao, al occidente con los municipios de Suárez, López de Micay y Buenaventura, al norte con los municipios de Jamundí y Buenaventura, y al sur con los municipios de Suárez y Morales, y el río ovejas al medio².

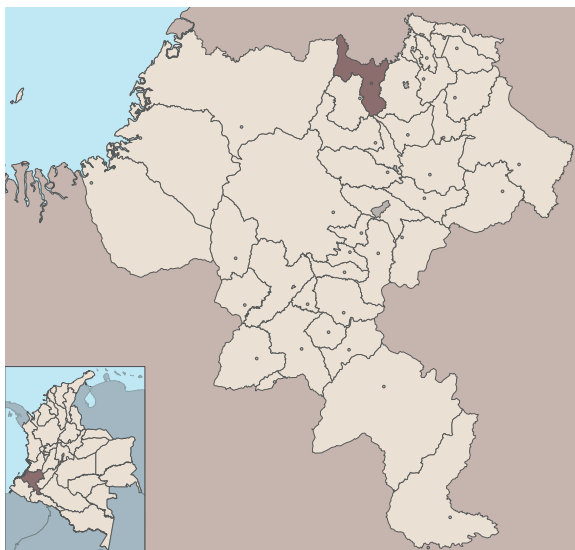
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2010 Buenos Aires contaba con una población de 29.392 personas³; la población masculina representaba el 61% de los habitantes con 20.217 personas y las mujeres el 39% con 9.083. Según proyecciones del DANE para el año 2015 el Departamento del Cauca contó con 1'379.070 habitantes, y la población de Buenos Aires ascendió a 32.225 habitantes, de los

2. Información tomada de: Información del municipio – Alcaldía de Buenos Aires. Disponible en: http://buenosaires-cauca.gov.co/informacion_general.shtml

3. Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) "Censo general 2005, perfil Buenos Aires, Cauca" [en línea], disponible en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/19110T7T000.PDF, recuperado: 7 de noviembre del 2017.

cuales aproximadamente el 75% vive en el sector rural. Actualmente en el municipio predomina la etnia negra (el 68,5% se auto-reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente), en segundo lugar la indígena y en menor proporción la mestiza⁴.

El 86.2% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica, 18.3% al de alcantarillado, 57.9% al de acueducto y sólo el 3.9% cuenta con línea telefónica. Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población es rural y se dedica a las labores agrícolas, el porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la zona rural de Buenos Aires es preocupante, ya que asciende al 60.8%; en la cabecera municipal es del 25.9%, y en total llega a 57.9% (Muñoz, n.d, 98).



4. Información tomada de: Reseña histórica – Alcaldía de Buenos Aires.
Disponible en: http://buenosaires-cauca.gov.co/informacion_general.shtml

2. Presencia de grupos armados en la zona

Buenos Aires ha sido uno de los escenarios del conflicto armado, social y político del Cauca, con una fuerte presencia de diversas guerrillas, como la Coordinadora Nacional Guerrillera, el M-19 y las FARC. Grupos paramilitares, particularmente el Bloque Calima de las AUC, también ejercieron dominio y control sobre pobladores de esta área. Hoy es uno de los escenarios donde la reconfiguración narco paramilitar es evidente, con grupos como las Águilas Negras, los Rastrojos y la Organización Nueva Generación.

El Cauca ha sido un territorio estratégico para los intereses de actores armados, narcotraficantes y multinacionales, principalmente por sus recursos ambientales y su ubicación geo-espacial. La cocaína y la marihuana han tenido gran auge históricamente en este departamento porque se constituye en un área de movilidad para aquellos que quieren acumular capital a través de actividades ilícitas. Además, es un corredor de movilidad estratégico para las operaciones de diversos grupos armados al margen de la ley. "El corredor Buenos Aires – río Naya es muy importante porque comunica con el eje de Argelia y con el Pacífico de Buenaventura y del Chocó, a través del río San Juan y, más arriba, por el río Atrato, escenario de tráfico de armas y drogas" (Muñoz, n.d, 99). Por el Cauca también se llega fácilmente a la zona donde limita el Valle con Tolima, y hay otro corredor hacia el Huila, con paso al Caquetá, importantes territorios en la geografía de la guerra y la confrontación militar con las FARC.

Esta situación y otros factores sociales y económicos han facilitado una histórica y permanente actividad de las guerrillas en el departamento. Han emergido guerrillas de primera generación como las FARC a finales de los sesenta; y guerrillas de segunda generación como el M-19, Movimiento Armado Indigenista Quintín Lame, y Jaime Bateman Cayón, sector disidente del M-19. Son muchas las razones por las que el departamento se ha presentado como un espacio de confrontaciones, entre estas," el abandono del Estado, la ubicación estratégica de algunas zonas del departamento, la exclusión ejercida por sectores de estirpe feudal, las condiciones de vida de los sectores pobres y marginados, la ausencia de canales de participación, la emergencia de movimientos sociales, la fuerzas de estos movimientos, y la represión con que se ha intentado frenar la emergencia o el avance de los movimientos sociales" (Muñoz, n.d, 100).

Los paramilitares, por su parte, hicieron presencia en el departamento del Cauca desde finales de la década de los 90

hasta el 2004, ingresando por el Valle del Cauca con el bloque Calima, el cual fortaleció sus bases asentándose en el norte del Cauca en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Cajibío y Santander de Quilichao, hasta desplazarse por todo el departamento.

El paramilitarismo cometió varias masacres en el territorio de Buenos Aires. La primera de ellas ocurrida el 4 de septiembre del 2000, donde los miembros del Frente Farallones del Bloque Calima llegaron al corregimiento La Balsa en jurisdicción del municipio de Buenos Aires donde asesinaron a cinco personas, violaron mujeres y torturaron jóvenes. También desaparecieron 30 personas en hechos que aún se encuentran sin esclarecer. Desde entonces amenazaron con perpetrar una masacre contra los habitantes de la zona.

La masacre anunciada se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de abril del 2001, cuando más de 100 paramilitares del Bloque Calima ingresan por Timba, Cauca asesinando y torturando a campesinos que eran tildados como colaboradores de la

guerrilla. La comunidad asegura que más de 100 personas fueron asesinadas. Luego de la masacre los paramilitares se enfrentaron durante tres días al Frente 29 de las FARC hasta el 16 de abril. La masacre fue realizada con colaboración del Ejército Nacional, que permitió la entrada y salida de los paramilitares.

Después el 18 de julio de 2001, miembros del Bloque Calima llegaron a la vereda La Silvia, del municipio de Buenos Aires y asesinaron a cinco personas. Las víctimas eran desplazadas de la masacre de El Naya. Su propósito era impedir que los desplazados, pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes regresaran a sus territorios.

Las últimas dos masacres registradas en el territorio de Buenos Aires, fueron perpetradas por un grupo armado sin identificar, la primera de ellas ocurrió el primero de agosto de 2010 en el corregimiento de Timba con el asesinato de cinco mineros, según el CINEP en esos meses se presentaron otros asesinatos parecidos a varios mineros de la zona. Posteriormente, el Frente 30 del Bloque Alfonso Cano de las FARC, llegó a una zona conocida

como el Bajo Naya y asesinaron a cinco personas, todas de una misma familia, el 7 de mayo de 2011.

Con la desmovilización de las autodefensas y del Bloque Calima en el Cauca, en particular, el 18 de diciembre de 2004, emergieron las bandas criminales, que siguieron con el negocio del narcotráfico y violación de derechos humanos en los territorios.

En el panorama planteado, es de resaltar que las comunidades han desplegado acciones de movilización social de resistencia, por más de 50 años al conflicto armado en sus territorios, con el fin de que sus derechos sean reconocidos y garantizados; aquí el papel de los y las líderes, así como el de las organizaciones sociales, ha sido fundamental para dichas acciones, sin embargo, en los últimos años se han incrementado las situaciones de riesgo para quienes ejercen esta labor; en su informe Panorama de los derechos humanos en el departamento del Cauca, la Defensoría del Pueblo (2018) afirma que:

(...) en el marco del acuerdo de paz, las FARC-EP, se desmovilizaron e hicieron dejación de las armas.

Sin embargo, en algunos territorios del departamento del Cauca surgieron grupos disidentes de esa organización guerrillera que no se acogieron a dicho acuerdo, que están relacionando acciones armadas que intimidan a la población civil. Por su parte, el ELN, ha pretendido ampliar su influencia cooptando los territorios dejados por las FARC- EP y así lograr conectar sus frentes en la costa pacífica entre Nariño y Chocó, para lo cual buscan aumentar su presencia en el Cauca, por los municipios cordilleranos y de costa. Del mismo modo, los grupos armados pos desmovilización de las Autodefensas, como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o también conocidas como "Clan del Golfo" y otras organizaciones criminales, ejercen una fuerte presión en el territorio, con un accionar también centrado en socavar los procesos sociales. Por consiguiente, ejercen violencia contra comunidades y colectivos sociales, con miras a destruir el tejido social, más allá de los intereses puramente económicos como la cadena de producción de narcóticos o la minería ilegal en la que encuentran financiación" (p.17).

Después del proceso de dejación de armas por parte de las FARC, la situación de riesgo para los habitantes de Buenos Aires no ha disminuido, ejemplo de esto es el hecho de que en el Cauca durante el año 2017 se presentaron un total de 1.908 amenazas y en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018 se dieron 1.099. Las amenazas tuvieron mayor ocurrencia en lugares donde hay presencia de actores armados o criminalidad organizada. En el caso del municipio de Buenos Aires, en el 2017 se dieron 29 amenazas y a junio 30 de 2018, 17 (Defensoría del Pueblo, 2018; 27). Las mujeres líderes no han estado por fuera de estas amenazas, tratándolas, generalmente, de "putas y lesbianas" y amenazándolas con delitos de violencia sexual contra ellas o sus hijas.

Finalmente, tiene lugar señalar que las mujeres, y en especial las mujeres líderes, se encuentran expuestas a situaciones de violencias al interior de sus hogares y en relación con las dinámicas del conflicto armado; sin embargo, parece que la institucionalidad del municipio sigue leyendo las situaciones de violencias contra las mujeres de manera aislada, y no reconoce como el derecho a una vida libre de violencias es interrelacional con derechos como la educación y el empleo, por mencionar algunos, ya que en el Plan de Desarrollo Municipal, Construyendo con la gente para la gente, 2016–2019, solo se hace referencia a que: La equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir las desigualdades de partida, conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. El municipio de Buenos Aires no cuenta con un Plan integral de atención y prevención para la mujer víctima de violencias en el marco de la Ley 1257 de 2008. La Comisaria de familia no tiene un equipo interdisciplinario adecuado para atender y tratar de solucionar los temas psicosociales (s,p).

NORMATIVIDAD NACIONAL A FAVOR DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES EN COLOMBIA

Colombia cuenta con una amplia normatividad en materia prevención, atención, protección, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres. Algunas de ellas asignan responsabilidades a las autoridades locales. Mediante la Ley 248 de 1995 el Congreso aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los derechos protegidos para las mujeres se encuentran estipulados en el capítulo II, artículos 3, 4, 5, 6.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" (art. 3). "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a) El derecho a que se respete su vida; b) El derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral; c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; d) El derecho a no ser sometida a torturas; e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h) El derecho a libertad de

asociación; i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones (art. 4).

Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos (art 5). El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye entre otros: a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (art.6).

Asimismo, la Ley 248 en el capítulo III, artículos 7, 8 y 9, establece los deberes del Estado colombiano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres:

- Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
- Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
- Incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.
- Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer.
- Tomar todas las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o prácticas jurídicas

frecuentes que respalden la violencia contra la mujer.

- Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
- Establecer los mecanismos judiciales y administrativos para el acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

La **Ley 294 de 1996** sobre las normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar ordena el tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. Cabe mencionar que los artículos del 4 al 22, así como el 25 y 30 de esta ley fueron modificados por la Ley 575 de 2000, lo cuales contemplan el procedimiento que debe adelantar la autoridad competente ante la denuncia de un caso de violencia intrafamiliar.

Estas leyes consideran que toda persona, en el contexto de la familia, que sea víctima de cualquier tipo de violencia por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir al Comisario de Familia del lugar donde reside o al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. Además, las autoridades deben competentes deben:

- Ordenar al agresor el desalojo de la casa o habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia.
- Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor, cuando éste ya tuviere antecedentes en materia de violencia intrafamiliar.
- En todos los casos de violencia

el Juez ordenará al agresor el pago, con sus propios recursos, de los daños físicos, psicológicos y materiales ocasionados con su *conducta*.

- Cuando la violencia o el maltrato revista gravedad y se tema su repetición, el Juez ordenará una protección especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere.

Adicionalmente, **la Ley 575 de 2000** otorga la responsabilidad a la comunidad y vecinos de informar a las autoridades competentes sobre los hechos de violencia intrafamiliar; describe el procedimiento a seguir para solicitar y otorgar una medida de protección, estableciendo la ruta y los tiempos máximos para el desarrollo de las acciones que contempla este procedimiento; y define las acciones a desarrollar por parte de las autoridades de Policía para impedir la repetición los hechos, remediar las secuelas físicas y psicológicas que se hubieren ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos, para prevenirlas se debe:

- Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque las lesiones no fueren visibles.
- Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de aquella.
- Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia.
- Suministrarle la información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y privados disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar.

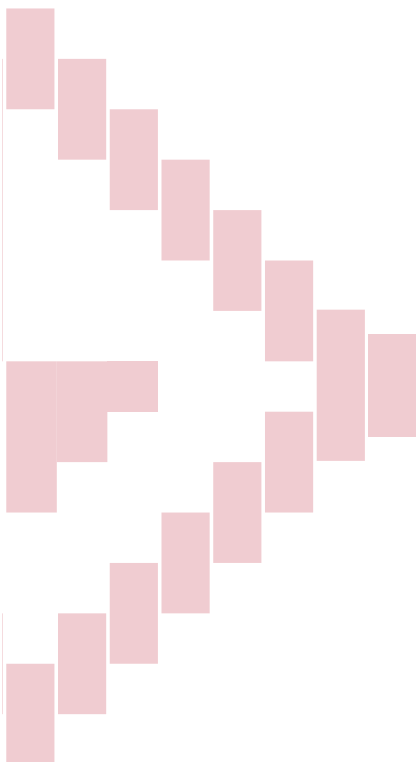
La **Ley 600 de 2000** y la **Ley 906 de 2004** por cuales se expiden los Códigos de Procedimiento Penal, que incluyen entre otros temas los principios rectores y las garantías procesales; la jurisdicción y competencias; las medidas cautelares; los incidentes de reparación integral y se describen los requisitos para

interponer una denuncia, querella o petición y define dentro de los delitos que requieren querella a la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria.

La Ley 640 de 2001 referente a las normas relativas a la conciliación establece en su artículo 32, que Defensores y Comisarios de Familia, agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y Jueces Civiles o Promiscuos Municipales, podrán adoptar en los casos de violencia intrafamiliar o violación de los derechos fundamentales de la familia, las medidas de protección previstas en la ley.

La Ley 742 de 2002 aprueba para Colombia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y define la competencia de la Corte en los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los crímenes asociados con la violencia sexual en delitos tales como: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier forma de violencia sexual.

El Congreso de la República a través de la **Ley 1009 de 2006** creó con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, el cual está a cargo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia.



La Ley 985 de 2005 tiene por objeto la adopción de medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional, como las colombianas y los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito. De misma forma, establece la formulación de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas en la cual intervendrá el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. Al Comité se le asignan las siguientes funciones:

Desarrollar marcos de información relativa a las *causas, modalidades, particularidades regionales y consecuencias de la trata de personas*.

- Prevenir la trata de personas a través de medidas sociales, económicas, políticas y jurídicas.
- Fortalecer las acciones de persecución a organizaciones criminales y, en general, la investigación, judicialización y

sanción del delito de trata de personas.

- Proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas, en los campos físicos y psicológicos, sociales, económica y jurídica.
- Promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas.
- Los demás que el Comité Interinstitucional considere necesarios.

Las autoridades competentes a nivel nacional y territorial serán las responsables de tomar medidas y adelantar campañas y programas de prevención de la trata de personas, fundamentados en la protección de los Derechos Humanos. Los programas deben tener en cuenta la diversidad cultural y étnica de las posibles víctimas, la demanda como una de las causas de la trata y la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas como factores de mayor vulnerabilidad para las víctimas de la trata de personas (Ley 985 de 2005, Artículo 5).

La **Ley 1257 de 2008** contiene normas para la sensibilización, la prevención y la sanción de las violencias y la discriminación contra las mujeres. Su objeto es garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias en el ámbito público y privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

La **Ley 1257 de 2008** define la violencia contra la mujer como:

(...) cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado" (Art. 2).

Las expresiones de las violencias contra las mujeres Incluyen aquellas situaciones económicas o patrimoniales, así como el control abusivo de las finanzas, las recompensas, el abuso económico o castigos monetarios a las mujeres a razón de su condición social, económica o política. Por otra parte, contiene las responsabilidades de las Comisarias de Familia como autoridades competentes para el establecimiento de las medidas de protección y de atención a la mujer víctima de violencia; se define el proceso de atención recalcando la oportunidad del mismo y la corresponsabilidad,

la integralidad, la autonomía, la coordinación interinstitucional, la no discriminación y la atención diferenciada.

Los principios contemplados en la ley para su aplicación e interpretación son: Igualdad real y efectiva; el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos

humanos; la corresponsabilidad de la sociedad y la familia en el respeto de los derechos de las mujeres y la responsabilidad del Estado en la investigación, prevención y sanción de toda forma de violencia contra ellas; la integralidad en la atención a las mujeres víctimas de violencias; la autonomía de las mujeres como su derecho a tomar decisiones sin interferencias indebidas; la coordinación en tanto obligación de las entidades responsables de la atención de las mujeres víctimas de violencias de trabajar de manera articulada; la no discriminación entendida como la garantía de todos los derechos contenidos en esta ley para todas las mujeres y la atención diferenciada en tanto la obligación del Estado de garantizar la atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo.

La Ley 1257 protege los derechos de las mujeres a: una vida digna, la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, la igualdad

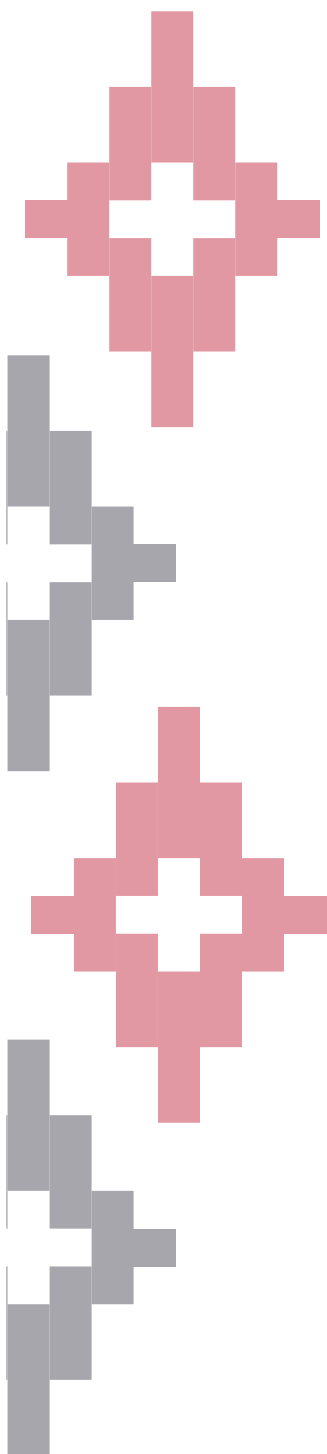
real y efectiva, no ser sometidas a forma alguna de discriminación, la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, la salud, la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.

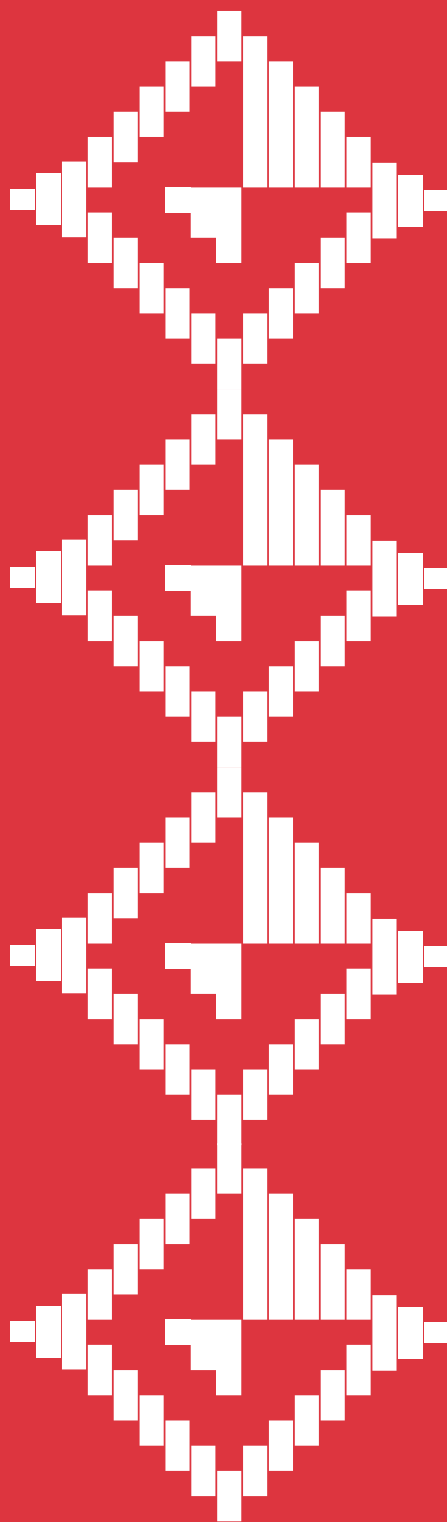
En su artículo 8, se incluye los derechos de las víctimas:

- Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad.
- Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor, y en todo caso se debe garantizar la prestación de este servicio a

través de la defensoría pública.

- Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes.
- Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia.
- Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva.
- Ser tratada con reserva de su identidad respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de *cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia, al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social.*
- *Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.*
- *Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas.*
- *A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia.*
- *La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.*





- *A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.*

En su artículo 9, la ley establece que las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social, haciendo énfasis en aquellas de responsabilidad del Gobierno Nacional y de las Entidades Territoriales. Dentro de las medidas a cargo del Gobierno Nacional se encuentran la formulación de estrategias, planes y programas de prevención y erradicación de las formas de violencia, programas de formación para servidores públicos en este tema, implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales, fomento de la sanción social y la denuncia de prácticas discriminatorias y las formas

de violencia, fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención en las diferentes zonas de conflicto armado del país, adopción de medidas para investigar y sancionar los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas e implementar el sistema de información relacionado con violencia. De la misma forma, las Entidades Territoriales deben incluir este tema en la agenda de los Consejos para la Política Social y en los Planes de Desarrollo con énfasis en prevención y atención para mujeres víctimas de violencia.

Igualmente, esta ley le asigna la responsabilidad al Ministerio de Comunicaciones para la elaboración del programa de difusión que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres; al Ministerio de Educación Nacional aquellas relacionadas con las medidas educativas; y al Ministerio de Protección Social (actuales Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social) lo relacionado con el ámbito laboral y la atención integral en salud incluida la asignación de recursos para prevenir la violencia a través del Plan Nacional de Salud.

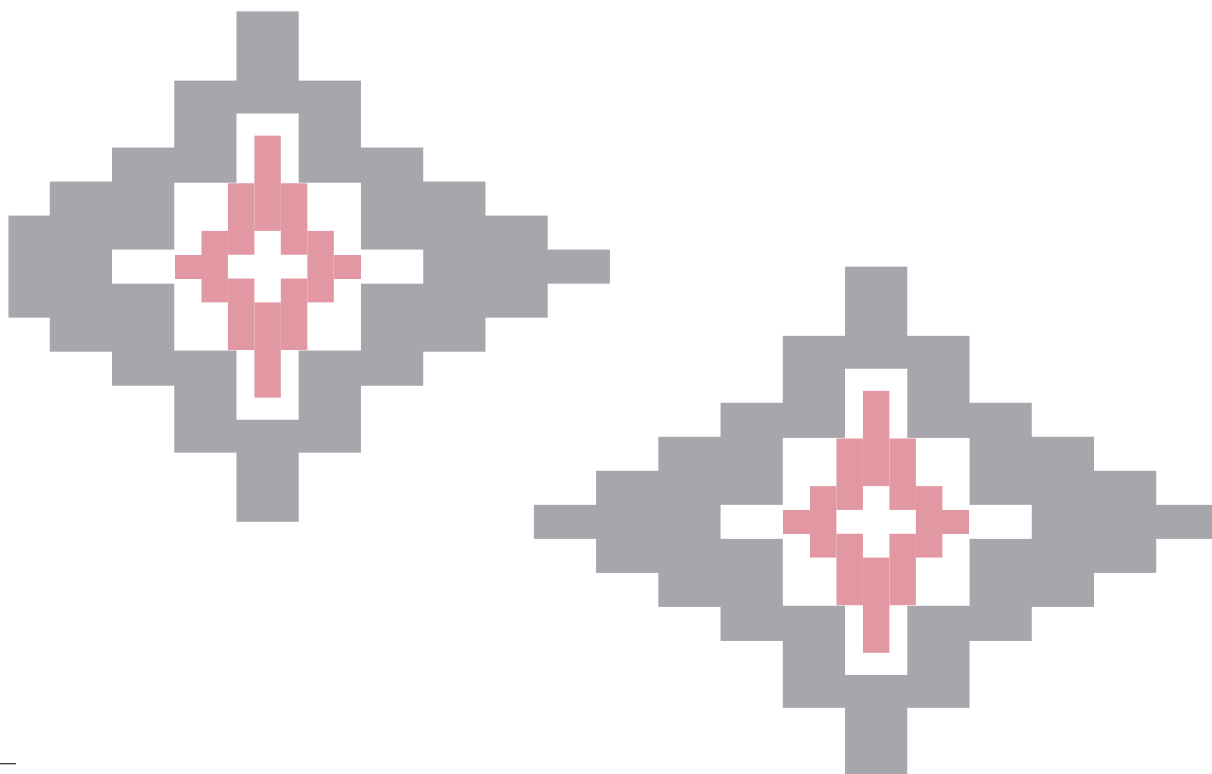
En la ley se definen las medidas de atención para las mujeres en situación especial de riesgo, y así evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. Estas medidas estarán a cargo de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quienes se encargarán de garantizar la habitación, alimentación y transporte de la víctima y de sus hijos e hijas o la asignación de un subsidio monetario por un periodo de 6 meses, prorrogable por seis meses más, hasta la recuperación de la salud física y mental de la mujer.

La **Ley 1336 de 2009** adiciona y fortalece el estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores aprobado por la Ley 679 de 2001. Para esto, regula el funcionamiento de los establecimientos de turismo, las aerolíneas y los cafés Internet, indicando las medidas preventivas e informativas que deben adoptar e implementar para controlar la presencia de eventos de explotación y turismo sexual en niños, niñas y adolescentes

dentro de las que se encuentran medidas para prevenir y contrarrestar el turismo sexual, medidas policivas y medidas penales.

La **Ley 1719 de 2014** modifica algunos artículos de las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004, a la vez que define medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la que ocurre con ocasión del conflicto armado. Asimismo, modifica las penas para los delitos contemplados en la ley 599 de 2000, establece los derechos y garantías, las medidas de protección y reparación y la atención en salud para las mujeres víctimas de violencia sexual.

La **Ley 1761 de 2015** crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como su prevención, erradicación y la adopción de estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.



Decretos y Resoluciones relacionadas con las violencias contra las mujeres

La Presidencia de la República a través del **Decreto 2737 de 1989**, creó las Comisarías Permanentes de Familia de carácter policivo, cuyo objetivo es colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las demás autoridades competentes en la función de proteger a los menores de 18 años que se hallen en situación irregular y en los casos de conflictos familiares. Estas Comisarías hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y estarán a cargo de un Comisario/a de Familia designado por el Alcalde de cada territorio.

A partir del 2006 este Decreto fue derogado por el Código de la Infancia y la Adolescencia, quedando vigente las Prohibiciones y Obligaciones Especiales descritas en los artículos del 320 al 325, los cuales se refieren a la entrada de menores en espacios donde se presenten espectáculos clasificados para mayores y las multas que deben

asumir los propietarios de estos establecimientos.

El **Decreto 652 de 2001** emitido por la Presidencia de la República de Colombia reglamenta la Ley 294 de 1996 del Congreso de Colombia, modificada por la Ley 575 de 2000 del Congreso. En este se define el procedimiento a seguir por parte de las autoridades competentes frente a la denuncia de un caso de violencia intrafamiliar el cual incluye la medida de protección, la conciliación, la prueba pericial, el arresto, el cumplimiento de las medidas de protección, las sanciones y el trámite de la apelación.

El **Decreto 4840 de 2007**, reglamenta la Ley 1098 de 2006, en el cual se incluyen la responsabilidad para la creación, composición y organización de las Comisarías de Familia y establece que los distritos y municipios deberán incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto de la entidad territorial un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la Comisaría de Familia.

El **Decreto 164 de 2010** crea la Comisión Intersectorial denominada “Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres” cuyo propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad para las mujeres víctimas de la violencia.

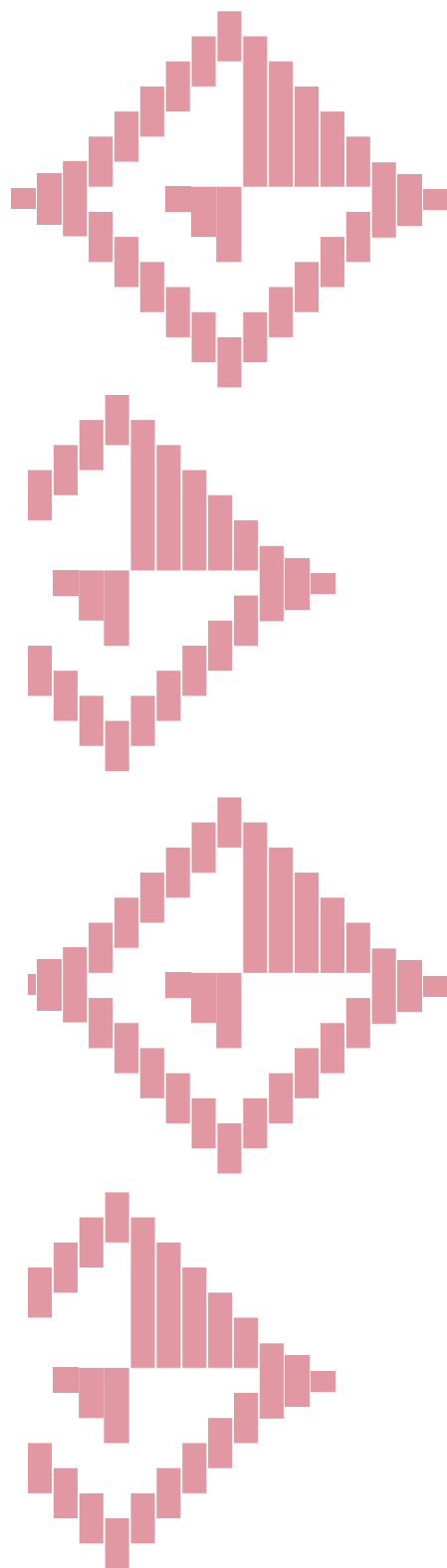
El **Decreto 4802 de 2011** establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y le asigna las siguientes competencias en términos de prevención:

- Aportar al Gobierno Nacional los insumos para el diseño, adopción y evaluación de la Política Pública de Atención y Reparación a las Víctimas garantizando el enfoque diferencial.
 - Promover y gestionar con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas la flexibilización y articulación de la oferta institucional para la atención.
- Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de los planes, proyectos y programas de atención.
- Coordinar la relación nación-territorio, para efectos de atención y reparación de las víctimas participando en los **Comités Territoriales de Justicia Transicional**.
- Implementar los mecanismos y estrategias para la participación de las víctimas, con enfoque diferencial, en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación.
- Desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas.
- Implementar las acciones para generar condiciones adecuadas de habitabilidad en caso de atentados terroristas en coordinación con las

entidades competentes.

- ◉ Entregar la asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas en los términos de la ley.
- ◉ Implementar acciones para brindar atención oportuna en la emergencia de los desplazamientos masivos.
- ◉ Realizar esquemas especiales de acompañamiento y seguimiento a los hogares víctimas y su inclusión en los distintos programas sociales.
- ◉ Coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
- ◉ Implementar el Programa de Reparación Colectiva.
- ◉ Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y social de las víctimas.
- ◉ Diseñar e implementar el programa de acompañamiento a la víctima.
- ◉ Operar la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.
- ◉ Implementar y administrar el Registro **Único de Víctimas**.





El Decreto 4463 de 2011 define las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Dichas acciones son:

El Diseño del Programa de Equidad laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres por parte del Ministerio del Trabajo.

- Sensibilización y Capacitación en coordinación y de manera articulada entre el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA– y otras entidades con competencias pedagógicas.
- Implementación del Sello de Compromiso Social con las Mujeres por parte del Ministerio del Trabajo para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres.
- Cultura de Igualdad de Condiciones a cargo de las Entidades Territoriales en coordinación con el Ministerio del Trabajo.
- Seguimiento a indicadores realizado por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– y el Departamento Nacional de Planeación –DNP–.
- Acceso a Programas Específicos de Formación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA-.

- Asesoría de las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP– y a sus empresas afiliadas para el desarrollo de medidas preventivas de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral.

El **Decreto 4796 de 2011** define las competencias de los actores del sector salud en términos de reporte de información, actualización de la guía para la atención de la mujer maltratada y del menor de edad maltratado, la incorporación de este tema en el Plan Decenal de Salud Pública y los criterios para la asignación del subsidio monetario y el monto del mismo.

El **Decreto 4798 de 2011** le asigna las siguientes responsabilidades al Ministerio de Educación Nacional, a las Entidades Territoriales y a las instituciones educativas en lo relacionado con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres en el ámbito educativo dando cumplimiento a los principios de la Ley 1257 de 2008:

- Vincular a la comunidad educativa en la promoción,

formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias.

- Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación.
- Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar sus propias decisiones.
- Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles los derechos de las mujeres.
- Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos.
- Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos.
- Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de los

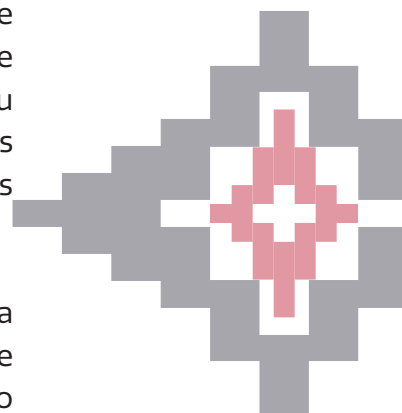
derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias.

- Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anterior, le asigna a cada actor del sector educativo las competencias particulares para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, con énfasis en la sensibilización, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres.

El **Decreto 4799 de 2011** define las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los mecanismos y recursos para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas. También se definen las autoridades competentes para la imposición de las medidas de protección, derivadas de un evento de violencia que se establecieron a través de la Ley 1257 de 2008 y su correspondiente procedimiento, así como las acciones que deben adelantarse por incumplimiento de dichas medidas.

El **Decreto 2897 de 2011** determina los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. Define dentro del objetivo del Ministerio de Justicia y del Derecho, la prevención y control del delito, la promoción de la cultura de la legalidad y la concordia y el respeto a los derechos, entre otras acciones. Dentro de las funciones de este Ministerio se encuentra la promoción de las normas legales y reglamentarias,



la protección jurídica, garantía y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– bajo los principios de interés superior, protección integral y enfoque diferencial, y las demás entidades competentes. Igualmente, dentro de las funciones de la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional está la definición de los lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la violencia basada en género, por parte de las Comisarías de Familia y otras autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales.

Los **Decretos 4463, 4796, 4798 y 4799/2011** reglamenta la Ley 1257 de 2008 en materia de trabajo e igualdad salarial, salud y seguridad social, educación y en garantía de acceso a la justicia.

El **Decreto 2734 de 2012** establece los criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo

19 de la Ley 1257 de 2008, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– y las autoridades competentes en el marco de sus responsabilidades.

El **Decreto 0552 de 2012**, mediante el cual se establece la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

El **Decreto 2734 de 2012** establece criterios, condiciones y procedimientos para otorgar medidas de atención a las mujeres por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país

La **Resolución 459 de 2012** adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. El Protocolo es de obligatorio cumplimiento para la atención de las víctimas de violencia sexual, por parte de las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y del

régimen subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En este documento se describen los 15 pasos fundamentales en la atención integral de las víctimas de violencia sexual. También contiene los procesos y los procedimientos contemplados en la normatividad vigente para los actores del SGSSS y de aplicación a nivel nacional por los prestadores de servicios en salud.

El Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual es el referente para el abordaje integral de la violencia sexual, por parte de los diferentes actores del sector salud. Desarrolla los elementos conceptuales, técnicos y normativos que sustentan la prevención, detección, atención (física y en salud mental), protección, recuperación y la activación de procesos intersectoriales en el marco del SGSSS.

La **Resolución 1895 de 2013** asigna los recursos para la financiación de las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia, incluidas en el artículo 19 de la **Ley 1257 de 2008** y establece los mecanismos de seguimiento

para la implementación de dichas medidas. De la misma forma, define la presentación de informes técnicos y el reporte de la información por parte las entidades territoriales y las EPS al Ministerio de Salud y Protección Social.

En esta resolución se establecen los lineamientos, los procedimientos y mecanismos para la implementación de las medidas de atención para la correcta ejecución de los recursos destinados a su financiación, definiendo las responsabilidades de cada actor que interviene dentro de la atención de la mujer víctima de violencia como son las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Adicionalmente, establece los criterios técnicos para las medidas de atención y los servicios y estándares mínimos que deben cumplir los Hogares y Casas de Refugio.

Medidas de la Corte Constitucional relacionada con la prevención de las violencias contra las mujeres

En el **Auto 200 de 2007** la Corte Constitucional verificó que el derecho a la vida y a la seguridad personal de los líderes y representantes de la población desplazada, requiere de la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades para efectos de garantizar su protección ordenando al Ministerio del Interior el diseño de un plan de acción específico para superar las falencias en los procedimientos de protección a estas personas.

El **Auto 092 de 2008** que profiere la Corte Constitucional reconoce el impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos del conflicto armado en Colombia sobre las mujeres en situación de desplazamiento forzado, adoptando medidas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional considera que las mujeres sufren un impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento y, por lo tanto, deben ser sujetos de especial protección. La Corte determina "contrarrestar los riesgos de género del conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado". En la providencia se identifican (10) riesgos que viven las mujeres en el marco del conflicto armado, es decir, diez factores de vulnerabilidad específica a los que están expuestas por ser mujeres. Uno de los riesgos es el de la violencia sexual, explotación sexual y abuso sexual en el marco del conflicto armado y, otro de ellos, es el de explotación o

esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.

La Corte identifica dieciocho (18) facetas de género del desplazamiento forzado, es decir, aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial a las mujeres por causa de su condición femenina en el marco del conflicto armado colombiano. Estas dieciocho facetas se presentan en dos categorías: por un lado, los patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes al desplazamiento pero que se ven potenciados por el mismo, impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas, tales como: la violencia sexual, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual; la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria y la discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado. Y como segunda categoría están

los problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados.

En este Auto, la Corte ordena: a) la creación de 13 programas específicos que complementen la política pública para la atención al desplazamiento forzado desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres; b) la protección a 600 mujeres en situación de desplazamiento víctimas de violencia sexual; c) informa a la Fiscalía General de la Nación de 183 relatos de crímenes sexuales cometidos contra mujeres en el marco del conflicto armado, y d) el establecimiento de dos presunciones constitucionales:

- La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos componentes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y de la valoración integral de su situación por

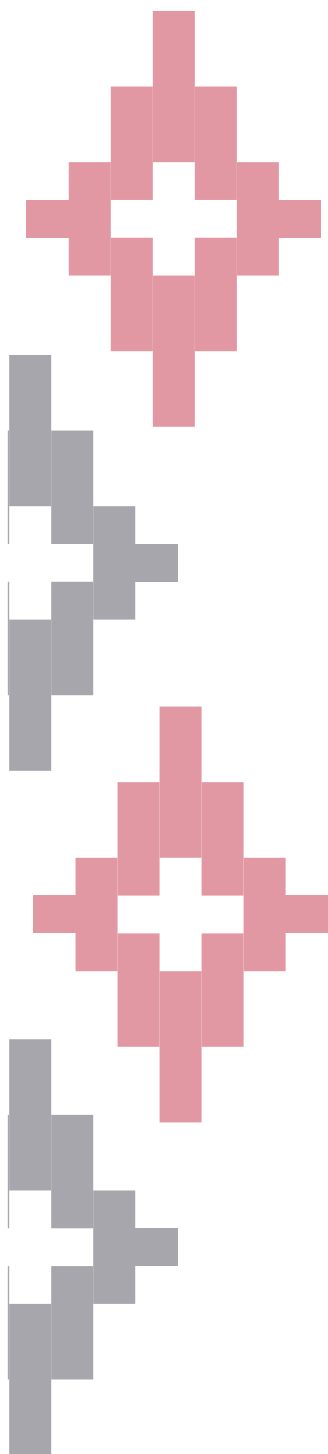
parte de los funcionarios competentes para atenderlas.

- La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular.

La Corte Constitucional debido a la exacerbación de la situación del conflicto armado interno, el cual vulnera los derechos fundamentales de las mujeres defensoras de derechos humanos, solicita a las entidades competentes a través del Auto **098 de 2013**, fortalecer sus acciones para evitar la continuidad de esta situación y contener el impacto sobre esta población.

Además, ordena a los diferentes entes de control tales como la Procuraduría y la Personería que en el ámbito de sus competencias efectúen el seguimiento permanente a los actores para que cumplan con lo dispuesto en el Auto en términos de restitución de derechos fundamentales sobre las mujeres víctimas y, en lo relacionado con la promoción, el ejercicio, la divulgación y la protección de los derechos fundamentales para las mujeres defensoras de derechos en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado y, en particular, de las víctimas de agresiones y actos de violencia.

El **Auto 251 de 2009** de la Corte Constitucional contempla la Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado y las medidas para el diseño e implementación del programa para la prevención de riesgos especiales en el ámbito del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada; resaltando las competencias del

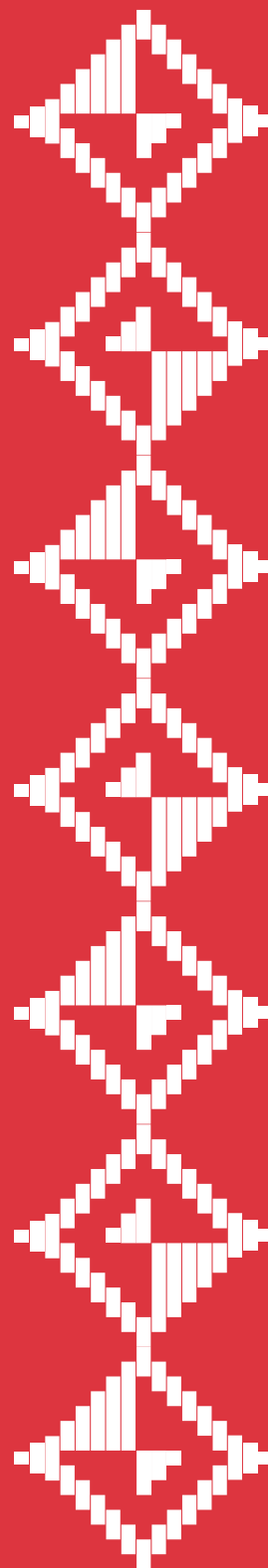


sector salud que se ubican en la categoría de derecho de vida y supervivencia a través de las siguientes estrategias:

- Monitoreo rápido de coberturas de vacunación.
- Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMÍ).
- Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI).
- Abordaje psicosocial.
- Abordaje intersectorial de la salud sexual y reproductiva y prevención de violencias.
- Entornos saludables.
- Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador y erradicación del trabajo infantil y la explotación laboral.
- Servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
- Enfoque diferencial y sub-diferencial por discapacidad y grupos étnicos.

El **Auto 006 de 2009** de la Corte Constitucional confiere medidas para la protección de personas desplazadas con discapacidad a través del diseño e implementación de un programa para la protección diferencial de las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado.

El **Auto 004 de 2009** de la Corte Constitucional frente a la protección de los derechos fundamentales de



las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado define las medidas a incluir en el plan de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

El **Auto 005 de 2009** de la Corte Constitucional con el fin de brindar protección a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado establece las medidas a incorporar en el Plan integral de prevención, protección y atención; en el que el sector salud tiene un compromiso en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de desplazamiento, generando acciones individuales y colectivas, promocionales, preventivas y resolutivas, que reduzcan la discriminación y la segregación, con un enfoque poblacional, de derechos y de desarrollo humano.

El **Auto 009 de 2015**, por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia

sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del conflicto armado y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la **Sentencia T-025 de 2004**.

La **Sentencia C-776/2010**, establece el principio de progresividad en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se aprueban medidas de alojamiento y alimentación a mujeres víctimas de violencias, reconociendo su derecho integral a la salud en cuanto procuran su estabilización física y emocional.

En la **Sentencia C-335/2013**, se dictan medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de prácticas discriminatorias y violencias contra las mujeres.

Por medio de la **Sentencia T-967/2014**, se brinda protección especial a mujeres víctimas de violencia psicológica. Se reconoce

esta violencia como aquella que afecta la integridad moral y psicológica de las mujeres, su autonomía y desarrollo personal, que se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo.

La **Sentencia T-012/ 2016**, reconoce que existen patrones discriminatorios de los/as operadores/as judiciales e impone la obligación de incorporar criterios de género para solucionar casos de Violencias Contra las Mujeres, desplegar investigación eficaz que garantice la vida, dignidad y a no tomar decisiones basadas en estereotipos de género.

En la **Sentencia T-265/ 2016**, se reconoce el acoso sexual como una forma de violencia contra las mujeres, específicamente en el ámbito laboral el cual constituye una forma de violación a los Derechos Humanos.

Por medio de la **Sentencia C-297/2016**, se declara exequible la norma que crea el tipo penal de feminicidio, reitera la importancia de entender el feminicidio como un delito que no puede ser considerado de manera aislada y, asimismo, establece el deber de debida diligencia del Estado.

La **Sentencia T-027/ 2017**, establece que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional y presentan una situación de desventaja extendida a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la familia, la educación y el trabajo. Resalta la violencia estructural contra ellas.

En la **Sentencia T-184/ 2017**, se asigna responsabilidades a los /las operadoras de justicia de proteger los derechos fundamentales de las mujeres al debido proceso, a una

vida libre de violencias y a que la víctima no sea confrontada con su agresor.

La **Sentencia T-735/2017**, señala que las autoridades encargadas de la atención de las mujeres víctimas de violencia de género incurren en violencia institucional cuando con su acción y omisión les causan o amenazan con causarles daño psicológico. Esa violencia es el resultado de actos de discriminación que impiden a la mujer acceder a una protección efectiva.

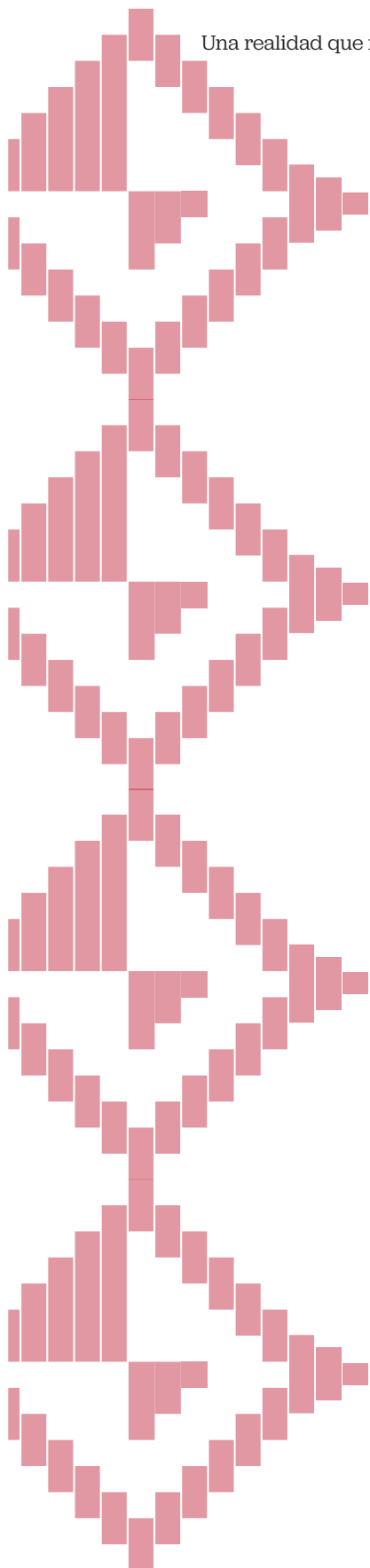
En la **Sentencia T-338/ 2018** se llama la atención sobre el papel que ejerce el Estado a través de sus jueces y magistrados, y su obligación de prevenir y propiciar a las mujeres una vida libre de violencias en el derecho civil.



VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

Prevenir, atender, proteger, investigar, sancionar y garantizar la no repetición de las violencias contra las mujeres, es dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, no hacerlo implica costos políticos y económicos para el país e innumerables costos psicosociales, económicos y sociales para las víctimas, los niños, las niñas, los adolescentes, las familias y la comunidad. Además, los hechos que por acción u omisión del Estado produzcan nuevas víctimas, violaciones a los derechos humanos o perpetúen la vulneración en aquellas víctimas ya identificadas, implica costos para su reparación y contribuye a fortalecer los imaginarios de que la justicia no opera en estos casos.

La violencia se encuentra en las relaciones basadas en la explotación en todas sus formas, donde unos sectores imponen su dominación sobre otros, originando la acumulación de bienes, riquezas y oportunidades a favor de unos cuantos y la desprotección de amplios grupos de la población que deben sobrevivir en condiciones de cotidiana frustración y pobreza, sin alternativas de construcción de un presente y un futuro humano y digno. “Los miembros de muchos grupos viven con el conocimiento de que deben temer a los ataques casuales, no provocados, sobre su persona o propiedad,



tiene otro motivo que el de dañar, humillar o destrozar a la persona" (Young, 2000: 106).

La violencia no permite elegir; se habita, es el cuerpo el que sufre los abusos despiadados de la violencia, es golpeado, violado, mutilado, humillado y violentado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las víctimas necesitan apoyo, solidaridad, comprensión e iniciar un largo camino en la reconstrucción y aceptación de ese cuerpo; para volverlo habitar y apropiarse de él.

Para interpretar y explicar la violencia contra las mujeres en sus diversidades identitarias se debe tener en cuenta que es un continuum en sus vidas, expresión de la opresión, subordinación y de la injusticia social, y entender que la relación socio-sexual que predomina en las sociedades actuales, "es una en la que el poder del amor de las mujeres, entregado libremente, es explotado por los hombres" (Jonasdotir, Anna C; 1993: 307-313). Entender que las violencias en contra de las mujeres se producen en el contexto de las relaciones amorosas permite comprender delitos como el feminicidio cometido por varones que dicen amar o haber amado a la mujer que matan.

Pues bien, las violencias que viven las mujeres en el municipio de Buenos Aires no son hechos aislados. Esta realidad ha estado desde la época de la esclavitud y la conformación del municipio, y en el espacio privado y público; y en épocas más recientes asociadas a las disputas del territorio, a la presencia de diferentes actores armados. Las mujeres lo expresan así:

"Desde los años 60 con el asentamiento de los diferentes actores armados las mujeres perdimos garantía a los derechos sexuales y reproductivos, además no denunciábamos, quizás por miedo o desconocimiento. Denuncia que se deber salir a la luz con lo de la JEP en el marco de los acuerdos de la Habana firmada con el gobierno colombiano y la FARC" (Mujer de Buenos Aires).

"El paramilitarismo afecto nuestro actuar y las prácticas tradicionales, por ejemplo, en las creencias en la medicina tradicional porque cuando buscamos medicinas para nuestros hijos éramos tratadas como brujas, en las labores domésticas querían estar metida en nuestras casas para manejar nuestra privacidad y todo lo relacionado con nuestros mitos leyendas y hasta religión" (Mujer de Buenos Aires).

"Nos prohibían hacer muchas cosas, a no hacer reunión y acabar con las organizaciones, hacer oficios para ellos, acostarnos temprano y a no

ir a los ríos, a bañar a lavar y todas las creencias espirituales que llevamos las mujeres de los pueblos afros" (Mujer de Buenos Aires).

"Nuestras prácticas de producción se fueron al piso por que en las fincas estos hombres constantemente cometían delitos desmembraban personas y convirtiendo esto en cementerio afectando duramente la economía y la forma de producción" (Mujer de Buenos Aires).

"Ellos fueron generadores de desplazamientos de muchas mujeres, acceso carnal abusivo en todo el municipio, aunque en algunos corregimientos se sintió más porque muchas de estas mujeres fueron embarazadas y a estos jóvenes les llaman los parquitos, en el marco de la Ley de Víctimas se hicieron las declaraciones masivas por el abuso a muchas mujeres" (Mujer de Buenos Aires).

"En el año 2000 fue el primer desplazamiento masivo de la parte alta de Timba donde se desplazaron más de 6000

personas y donde más del 60% fueron mujeres quedando las familias en un estado de indefensión y perdiendo su capacidad económica y su arraigo"
(Mujer de Buenos Aires).

"En abril del año 2001 la comunidad de Buenos Aires con la masacre del alto Naya donde murieron más de 150 personas y se registraron 30 y la gran mayoría eran mujeres, niños, niñas, cometiendo crímenes de lesa humanidad, según investigación los paramilitares abusaron de la mujer emblemática del pueblo que padecía una discapacidad cognitiva y luego descuartizaron su cuerpo tirándolo por un abismo, esta incursión paramilitar conllevó a las mujeres entre el año 2000 y hasta nuestros días a callar todos estos actos violentos y abusivos por miedo a perder la vida"
(Mujer de Buenos Aires).

Lo anterior, presenta cómo las violencias contra las mujeres han sido parte de los repertorios violentos de los actores armados, a partir de dos ejes centrales: el territorio como escenario de conflicto y los impactos que estos hechos tienen en los cuerpos, vidas y proyectos de las mujeres. Ellas quedan en medio de la confrontación armada y de la reconfiguración de las relaciones sociales que tienen lugar en su territorio y comunidad, y partiendo de reconocer que una de las intenciones de los actores armados es desarticular el tejido social generando desconfianzas y rupturas en la población, en contextos como el de Buenos Aires, en el que las mujeres son un eje articulador y de transmisión de prácticas ancestrales propias de las comunidades afrodescendientes e indígenas, ellas se convierten en sujetos de las acciones violentas, de control y explotación que tienen lugar en la guerra. Así lo expresan las mujeres:

"Las mujeres hoy seguimos siendo blanco de los violentos que se empeñan en callar nuestras voces, controlar nuestros cuerpos y acabar con nuestro gran sueño de paz".

En el municipio de Buenos Aires han ocurrido múltiples violaciones contra los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, actos que rechazamos con vehemencia, sumado a ello la situación de las mujeres es mucho más compleja, los actores armados legales e ilegales las han visto como víctimas fáciles de asechar, nuestros cuerpos siguen siendo el botín de guerra y máxime si se es lideresa comunitaria y lo peor del caso es que también se refleja en las instituciones que no creen en nosotras a la hora de presentar las denuncias.

El posconflicto agudizó la situación elevando el riesgo para los líderes y lideresas defensoras de la paz, pero las instituciones han mantenido un silencio cómplice frente a todos estos casos. Las mujeres hemos realizado todo tipo de denuncias por diferentes casos, Panfletos,

amenazas directas, violencia sexual, intrafamiliar, hurtos entre otros, pero hasta hoy no llegan respuestas.

Las Lideresas hoy corremos un grave peligro porque nos señalan de manera directa, hechos como los ocurridos el 20 de abril de 2018, muestra esta crítica realidad. Nos encontrábamos en una reunión en la Finca la Trinidad, al móvil de la lideresa Deyanira Peña llegó un mensaje amenazándola de muerte a ella y sus compañeros por estar en contra de unos Galpones de pollos existentes en la comunidad de San Miguel, acusándonos de hacer denuncias y no dejar trabajar y ofreciéndonos muertes para los sapos.

Es por ello que exigimos a las autoridades se nos garantice la vida, integridad física y psicológica a las lideresas de Buenos Aires y que nos permitan seguir desarrollando nuestros liderazgos de manera autónoma y tranquilidad" (La Paz con rostro de Mujer: Comunicado a la opinión pública del Colectivo de Mujeres Trascendiendo, abril de 2018).

De acuerdo, al informe del

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2016, en Buenos Aires (Cauca), el 7,67% de las mujeres fueron víctimas de violencia de pareja mientras que no se registran casos para los varones en el mismo escenario. La violencia entre otros familiares la sufren mayoritariamente las mujeres correspondiendo al 11,08%.

Por otro lado, los porcentajes desagregados por sexo en los casos de presunto delito sexual, son 12,39% cometidos contra mujeres y 5,99% contra varones; en los casos de homicidio son 35,96% contra varones y 6,19% contra mujeres; y de los casos de violencia interpersonal el 35,97% se cometieron contra varones y el 18,58% contra mujeres. (Ver: Tabla No. 1).

Tabla No. 1

Modalidades	Mujer		Hombre		Total	
	Casos	Tasa x 100.000 hab.	Casos	Tasa x 100.000 hab.	Casos	Tasa x 100.000 hab.
Homicidios	1	6,19	6	35,96	7	21,32
Violencia interpersonal	3	18,58	6	35,96	9	27,41
Violencia entre otros familiares	1	11,08	1	10,57	2	10,82
Violencia de pareja	1	7,67	0	0	1	3,77
Exámenes médico legales por presunto delito sexual	2	12,39	1	5,99	3	9,14

Cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (2016), para el municipio de Buenos Aires.

Para el año 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que la violencia entre otros familiares la sufren mayoritariamente las mujeres correspondiendo al 21, 57%, porcentaje que representa un incremento del 10,49% en relación con el 2016.

Por otro lado, los porcentajes en los casos de violencias de pareja, desagregados por sexo son los siguientes: las mujeres representan el 30.06% de las víctimas, lo cual se traduce en un incremento del 22,39% en comparación con el 2016, para los varones no se reportaron casos.

En los casos de presunto delito sexual, no hay una variación significativa entre 2016 y 2017; de los casos de violencia interpersonal el 29, 4% se cometieron contra varones y el 6,09% contra mujeres.

Si bien para el 2017, el homicidio lo siguen sufriendo más los varones, para las mujeres se dio un incremento de 5,98% en comparación con el año anterior (Tabla No. 2).

Tabla No. 2

Modalidades	Mujer		Hombre		Total	
	Casos	Tasa x 100.000 hab.	Casos	Tasa x 100.000 hab.	Casos	Tasa x 100.000 hab.
Homicidios	2	12,17	14	82,33	16	47,85
Violencia interpersonal	1	6,09	5	29,4	6	17,95
Violencia entre otros familiares	2	21,57	0	0	2	10,52
Violencia de pareja	4	30,06	0	0	4	14,78
Exámenes médico legales por presunto delito sexual	2	12,17	0	0	2	5,98

Cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (2017), para el municipio de Buenos Aires.

Además de estas cifras, el reporte del Juzgado Promiscuo Municipal de Buenos Aires, amplía el panorama pues para

el año 2016 se llevaron a cabo 18 audiencias por el delito de Violencia Intrafamiliar, de las cuales en una se cumple la orden de captura, otra se retira y las demás terminaron por preclusión.

Según lo presentado por el Juzgado, para el año 2017 se realizaron 10 audiencias de preclusión por Violencia Intrafamiliar, y en el año 2018, hasta agosto, se han registrado 14 audiencias de preclusión (Ver tabla No.3).

Este reporte pone de manifiesto no sólo la cantidad de casos ocurridos y registrados durante los periodos en mención, sino también que los procesos penales terminan porque no existen pruebas suficientes o porque las pruebas recabadas perdieron su valor.

Tabla No. 3

Delito	Año	Casos (Audiencias)	Nivel de respuesta
Violencia Intrafamiliar	2016	18	Orden de captura (1)
			Retiro (1)
			Preclusión (16)
	2017	10	Preclusión (10)
	2018	14	Preclusión (14)

Cifras de Violencia Intrafamiliar reportadas mediante derecho de petición por el Juzgado Promiscuo Municipal (2016, 2017, hasta agosto de 2018). Buenos Aires, Cauca.

Llama la atención que la información no se encuentra discriminada por etnia u orientación sexual. Por ello es importante mencionar la situación de inseguridad que vive la comunidad LGBTI en la región, de acuerdo a la Corporación Anne Frank, personas de esta comunidad han sido amenazadas por su orientación sexual y por

ser pareja. Se sabe que han recibido varias advertencias por parte de actores desconocidos con sentencias de muerte, por lo que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente del municipio.

En relación con las mujeres indígenas en el IV Informe de la Mesa por el derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres (2018), se incluye la situación de violencia contra las mujeres indígenas del norte del Cauca, si bien no se menciona el municipio de Buenos Aires, tiene lugar incluir las cifras que contiene dicho informe: 91 casos de violencia económica, 263 casos de violencia psicológica, 88 casos de violencia sexual y 184 casos de violencia física (p, 19).

Finalmente, señalamos que para la elaboración del presente informe no se obtuvieron cifras de las violencias contra las mujeres afrodescendientes ni contra las líderes sociales y defensoras de derechos humanos.



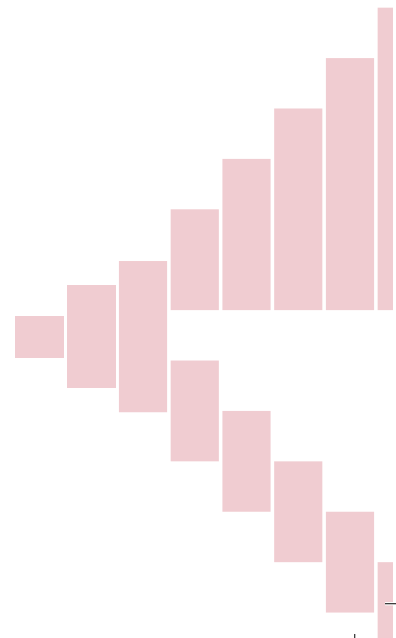
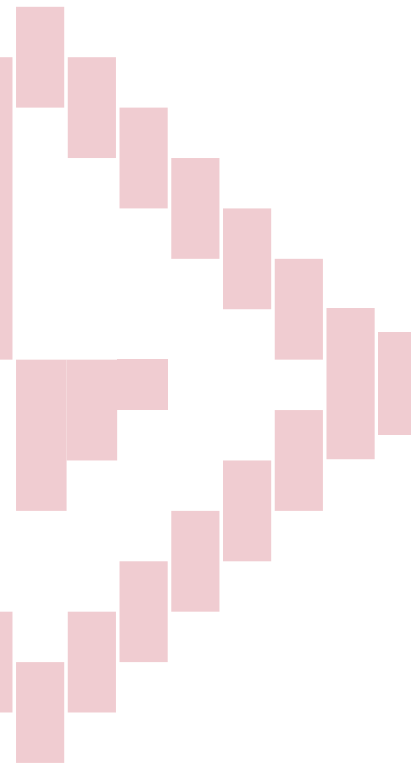
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL

Es fundamental señalar que las violencias contra las mujeres tienen lugar tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, ya que responden a las formas de dominación que las sociedades patriarcales imponen sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. Si bien el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno colombiano y las FARC, representa una oportunidad para el país en materia de transformación de las lógicas de violencia empleadas para la resolución de conflictos agrarios, económicos y políticos, no se puede dejar de tener presente que, en materia de garantía de una vida libre de violencia contra las mujeres, se hace necesario no solo detener el conflicto armado, sino también transformar las lógicas relacionales de lo privado y cotidiano que legitiman dichas violencias, promueven la impunidad y naturalizan e invisibilizan las condiciones de injusticias, subordinación y opresión que viven las mujeres colombianas. En otras palabras, para la garantía de una vida libre de violencias contra las mujeres, además de garantizar lo que se acordó

en materia de derechos de las mujeres en el Acuerdo Final, se deben también transformar las lógicas patriarcales, las subjetividades militaristas y la masculinidad hegemónica aprendida, reproducida y aun mantenida por los diferentes actores armados.

Este continuum de la violencia contra las mujeres en Colombia está presente en todos los espacios de sus vidas y el riesgo puede incrementarse, motivo por el cual se hace necesario monitorear cómo se comporta la violencia contra las mujeres en el proceso de implementación del Acuerdo y de reincorporación. El municipio es rico en diversos recursos naturales cuyo control siempre ha estado en disputa por diferentes actores armados; zonas mineras donde se encuentra la presencia de multinacionales interesadas en la extracción de recursos —muchas veces por encima de los derechos de las comunidades— y donde en la actualidad existen serias preocupaciones en lo que tiene que ver con la restitución de los cultivos ilícitos y el desmantelamiento de las redes de narcotráfico.

Para tener una visión global de las situaciones de violencias cruzadas que han vivido las mujeres en Buenos Aires se presentan las cifras del Registro Único de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en relación con los hechos victimizantes en contra de las mujeres. En este municipio se reportaron 23.275 delitos, de los cuales se declararon 11.366, es decir que sólo fueron declarados el 49% de los hechos victimizantes. De este total, 11.775 delitos fueron cometidos contra mujeres, sin embargo, sólo se declararon 5.684. Los delitos cometidos contra las mujeres que tienen mayor impacto son el desplazamiento forzado, las amenazas y los homicidios. Respecto al desplazamiento forzado se



encuentra que, de 19.466 casos, 9765 fueron de mujeres, es decir un 50.2%. No obstante, 4.694 hechos dejaron de declararse, pues solo se registran 5.071 desplazamientos de mujeres. Frente a las amenazas, de 1.943 casos reportados, 1.026 fueron contra mujeres, es decir el 53%. Pese a ello, sólo 256 amenazas fueron declaradas. También se encuentra que 480 homicidios fueron cometidos contra mujeres, de 989 ocurridos en el municipio, pero sólo de declararon 142.

Para indagar acerca de la valoración que las mujeres tienen de los cambios en la seguridad y las transformaciones en las relaciones sociales en Buenos Aires, luego de la firma de la Acuerdo, 2016, y el inicio de su implementación, la Casa de la Mujer en interlocución con las mujeres, diseñó el instrumento cualitativo para la recolección de información que tiene como fin que las mujeres y sus organizaciones realicen un ejercicio de observación y análisis alrededor de los temas mencionados. La información fue recolectada por las mujeres de Buenos Aires y la Casa de la Mujer.

A continuación, se presentan dichas valoraciones

Seguridad en los territorios, se indagó por la garantía de los derechos humanos de las comunidades y la garantía de una vida libre de violencias para las mujeres tanto en el espacio público como en el privado. Los indicadores incluidos en esta categoría fueron: violencia contra las mujeres, cambios en la movilidad y ocupación del espacio público por parte de las mismas, afectaciones en las practicas comunitarias de las mujeres a partir de la firma del Acuerdo, la instauración de las zonas veredales y los impactos en sus vidas. Estos indicadores relacionados con la presencia y accionar de los grupos armados legales e ilegales en sus territorios.

Relaciones sociales, tiene que ver —desde una perspectiva

psicosocial— con el tipo de relaciones que se construyen a propósito de la percepción que se tiene del otro, de sí mismas y de los cambios en la cotidianidad de los territorios. A la vez que se interesa por conocer qué hacen las mujeres frente a las circunstancias que les generan temor y desconfianza. Tiene como premisa que en el conflicto armado las relaciones sociales fueron impactadas de diversas formas. Todos los actores armados —sin excepción— a través de sus estrategias de violencia y dominación fracturaron el tejido social. Sin embargo, en medio del conflicto las mujeres y las comunidades también fueron construyendo estrategias de resistencia a ese orden violento, que les permitieron impulsar y mantener procesos de solidaridad, sororidad, reconstrucción de la memoria, exigibilidad de derechos, entre otros. Para saber acerca de las valoraciones de las mujeres, se incluyeron indicadores como: las percepciones que tienen las mujeres de su comunidad, de ellas mismas como sector político y social, y de los actores armados tanto legales como ilegales que tiene presencia en sus territorios. Se indagó también por los rumores y las situaciones que han generado miedo en este periodo de tiempo y sobre cómo las mujeres están haciendo frente a dichas situaciones.

Valoraciones de las mujeres acerca de la seguridad en Buenos Aires después de la firma del Acuerdo Final

“La violencia estructural que se vive en el territorio nos obliga a recordar toda historia que hemos vivido durante largos años, y miramos con preocupación cómo se siguen vulnerando los derechos de las mujeres” (Mujer de Buenos Aires).

“Nosotras las mujeres de Buenos Aires, hacemos un llamado perentorio para que no sigamos siendo



blanco del conflicto y se tomen medidas inmediatas de proteger a las mujeres para que puedan ejercer la labor de líderes defensoras de los derechos humanos” (Mujer de Buenos Aires).

Luego de sistematizar y analizar la información recolectada en el municipio de Buenos Aires, se puede señalar que ha aumentado la presencia de hombres armados tanto de la fuerza pública como de la insurgencia debido a la dejación de armas y reincorporación de los miembros de las FARC, hecho que genera sensaciones encontradas en las mujeres, ya que la militarización de la vida cotidiana siempre ha estado asociada a la guerra y si bien esta vez ocurre en el marco de la implementación de un acuerdo de paz, las condiciones de seguridad hacen que se valore el proceso como frágil, debido a que las comunidades están siendo víctimas nuevamente de amenazas, hostigamientos y demás hechos violentos por parte de otros actores armados que disputan el control del territorio.

Al respecto, de manera preocupante las mujeres

perciben que otros actores armados (Paramilitarismo, Águilas Negras y ELN) han incrementado sus acciones de intimidación y control, ya que no tienen que disputar con las FARC. Al respecto, en la categoría seguridad en los territorios, al preguntar a las mujeres de Buenos Aires sobre ¿Qué situaciones de violencia contra las mujeres han identificado desde la firma del Acuerdo Final?, encontramos que las amenazas contra las mujeres líderes se han incrementado en el municipio y es una de las modalidades de violencia que más preocupación les genera; amenazas que presuntamente son realizadas por los grupos paramilitares que tienen y no han dejado de tener presencia en la zona, y se denominan BACRIM pero que para la comunidad son los mismos grupos paramilitares:

“A la fecha se han presentado distintas situaciones de violencia, como panfletos donde se amenazan a diez mujeres. Los presuntos responsables de estas amenazas son las Águilas Negras y las Bacrim” (Mujer de Buenos Aires).

En cuanto a la violencia política, se encuentra que la situación de seguridad para las mujeres que ejercen papeles de liderazgo y hacen parte de organizaciones sociales es precaria pues se han presentado situaciones de feminicidio y amenazas por parte de los grupos armados y excompañeros afectivos de ellas.

Asimismo, en la zona de Elvira, Buenos Aires, sucedieron algunos altercados entre miembros de las FARC y también se han dado violaciones leves al acuerdo por parte del Ejército Nacional. En éste último caso se trató de que el Ejército no proporcionó las medidas de seguridad pertinentes a los miembros de las FARC. Mientras que, en el altercado protagonizado por parte de las FARC, un miembro trató de agredir a una mujer, su pareja sentimental, por celos (Mujer de Buenos Aires).

“El día 24 de 2018 octubre se perpetró un acto de barbarie contra mi hija Jessica Viviana Carabali⁵ Jiménez de 31 años, madre de una hija de 10 años y

un niño de 4 años fue asesinada de dos disparos en la cabeza. Era una líder que desempeñaba diferentes cargos en las organizaciones comunitarias como secretaria de la Junta de acción comunal en 2 períodos, secretaria de la Junta del acueducto interveredal Casamar, secretaria de la asociación de mujeres emprendedoras de la vereda santa Catalina y también fue secretaria ad honorem del Consejo comunitario cerro Tete. Últimamente, además del liderazgo en el Concejo se desempeñaba como integrante de La Guardia; participó como supervisora del censo al Naya; allí culminó su tarea con éxito, pero ella venía recibiendo amenazas telefónicas verbales y por terceras personas hace ya algún tiempo; yo le hice la recomendación que denunciara, pero no me hizo caso porque ella sabía de donde provenían las amenazas; yo miraba que ella tenía mucho miedo, pero no decía nada. Puse en conocimiento de las autoridades lo que yo conocía el día que fue asesinada, por lo que ella me dijo, y lo que

5. El testimonio fue brindado por la madre de la víctima, quien además dio su autorización para que el feminicidio de su hija no quede en la impunidad.

me informó la comunidad. El padre del niño de 4 años, Eric García Mina, Cabo 3 del Ejército nacional le pidió que le enviara al niño para comprarle algunas cosas. Ella lo envió, pero él no fue a recibirlo, así que una vecina se encargó del niño para no dejarlo deambulando. Ese día mi hija fue asesinada. Desde que denuncié he recibido muchas amenazas y temo por mi vida porque soy testigo. No tengo medidas de protección y el Consejo comunitario me ha asignado un esquema colectivo que es igual para miembros del Consejo, pero el esquema me hace difícil llevar a cabo mi vida laboral como docente de un colegio de Buenos Aires. Las amenazas contra mí son reiteradas y mi estado emocional se ve afectado por el temor a ser asesinada como mi hija. Las autoridades competentes no hacen caso, no investigan y hasta me han dicho que es un crimen pasional. En dos meses mi hija y otra joven fueron asesinadas; la primera en una fiesta social y luego mi hija. Tuve que abandonar el territorio donde vivía, tuve

que dejar todo atrás perdí el fruto de mi trabajo. Este crimen fue la crónica de una muerte anunciada solo pido ayuda para que no termine siendo yo una víctima más de los asesinos" (Mujer de Buenos Aires).

Continuando con el análisis, se debe señalar que además del impacto de la presencia de actores armados también han representado cambios en las posibilidades de movilidad de las mujeres, la imposición de toques de queda que limitan el desarrollo de sus acciones cotidianas, familiares, sociales y políticas.

Por otro lado, en el municipio hay entrada y salida constante de representantes de organizaciones sociales, de la academia, de partidos políticos, entre otros actores; lo que se percibe como positivo en tanto hace visible a los municipios y sus realidades. Sin embargo, genera preocupación también la presencia de otras personas que se han asentado en la región, el aumento de la inseguridad (robos, atracos y acoso a las mujeres) y la percepción de que la policía no

presta una respuesta adecuada ante estas circunstancias. De manera particular, preocupa a las mujeres del municipio la llegada de hombres que no se sabe de dónde vienen y que se ubican en las calles vendiendo alimentos o distintos objetos, para las mujeres estos hombres se encuentran haciendo vigilancia del territorio, lo que genera un clima de zozobra y desconfianza y se significa con preocupación, ya que recrea una situación similar a la ocurrida antes de la llegada del Bloque Calima al territorio.

"Hoy la situación en nuestro municipio se agudiza la situación por la presencia de múltiples actores armados legales e ilegales, el EPL, Las Autodefensas Gaitanistas, disidencias de las FARC, Ejército y Policía, esta situación tiene hoy las comunidades del Naya a punto de desplazarse por los enfrentamientos en la zona, la comunidad del Ceral y la Elvira están en un riesgo inminente por la ubicación de la Zona de Capacitación y Reincorporación donde están los excombatientes de las FARC" (Mujer de Buenos Aires).

"Las mujeres los sentimos desprotegidas por que las instituciones del estado hacen caso omiso para defender nuestras situaciones" (Mujer de Buenos Aires).

"Sumado a ello el proceso electoral de 2018, llegaron panfletos a la comunidad de las águilas negras amenazando a los líderes y lideresas para que voten por el candidato de la derecha" (Mujer de Buenos Aires).

"En días pasados fui víctima de una amenaza directa por parte de un sujeto en la vereda de Timba Valle; me abordo y me pregunto que si yo era de izquierda o derecha, yo me quede callada....Él me dijo, yo sé que vos sos de izquierda, no ves noticias, no sabes cuantos líderes han asesinado somos nosotros quienes los

estamos matando, pero el día que te vamos a matar yo te aviso, yo le pregunte con quien trabaja y dijo con la derecha, y 3 días después me llegó el panfleto que nos declaraba objetivo militar a todos los petristas" (Mujer de Buenos Aires).

Respecto de la fuerza pública, las mujeres denuncian que tanto la policía como los militares que han llegado a la comunidad construyen relaciones basadas en la desconfianza con las comunidades y los consideran cómplices de los grupos delincuenciales: "son toscos y prepotentes" (Mujer de Buenos Aires).

Estos cambios en los territorios invitan a hacer un análisis alrededor de la legitimidad que se les atribuye a los actores armados legales o ilegales para el control del territorio en la actualidad. Las mujeres señalan que antes del Acuerdo, las FARC ejercían un control en el territorio en materia de seguridad. Desde noviembre del 2016 perciben un aumento del control territorial por parte de los

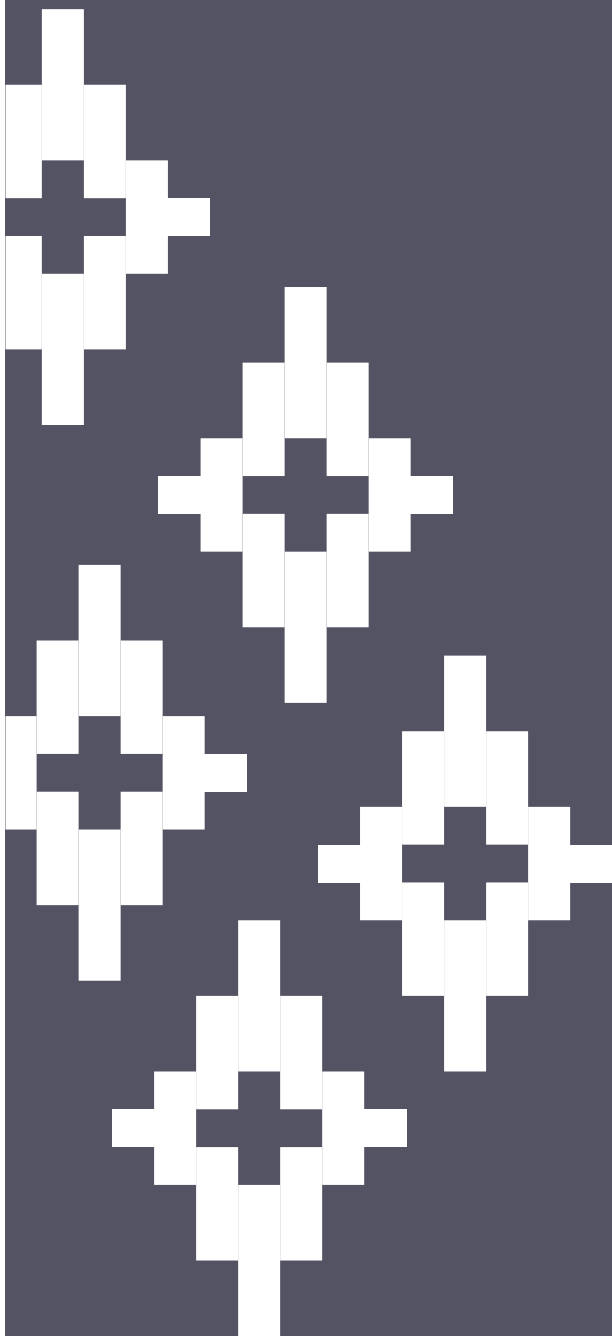
otros actores armados, y resaltan preocupación por las formas de control de la movilidad y las acciones bélicas de dichos grupos. Aunado a estas limitaciones para ocupar y habitar el territorio, las mujeres señalan el acoso como una práctica que va en aumento y genera temor por los hechos de violencia sexual.

A modo de conclusión de lo presentado hasta el momento es posible afirmar que la presencia de la fuerza pública sigue percibiéndose como ineficaz además de conflictiva con la comunidad, lo cual puede llevar a la legitimación de otros grupos armados, hecho que perpetuaría las lógicas que han acompañado el conflicto armado hasta la fecha. Asimismo, existe una negligencia por parte de la fuerza pública y el Estado en reconocer las formas en que la estructura paramilitar, pese al proceso de desmovilización, continúa operando en el territorio. Esto genera en la comunidad una sensación de desprotección y desconfianza frente al accionar de la fuerza pública. Adicional, las mujeres reconocen que la violencia contra ellas sigue **ocurriendo en los distintos**

contextos: casa, escuela, trabajo y calle; y llaman la atención sobre la discriminación que viven en los espacios laborales por el hecho de ser mujeres, ser negras y por su edad.

Valoraciones de las mujeres acerca de los cambios en las relaciones sociales en Buenos Aires después de la firma del Acuerdo Final

El primero de ellos es el impacto que la dejación de armas de las FARC tuvo en las relaciones sociales, se hace evidente que el silencio, el miedo y la sensación de inseguridad tienen lugar protagónico y afectan directamente la participación política de las mujeres. Las mujeres perciben una tendencia de la mayoría de personas de la comunidad a no conversar, a aislarse y a no querer vincularse con procesos ya sean informativos o de capacitación alrededor del Acuerdo Final. Esta situación ocurre por la confluencia de varios factores como los son: los cambios en las economías de la región, las inconformidades con los procesos de restitución, la llegada de nuevas personas a los territorios, la presencia de los actores armados ilegales (Paramilitares, Bacrim), el aumento de la fuerza policial y



del ejército; y los rumores alrededor del contenido y la implementación del Acuerdo Final (los cuales iniciaron a circular desde inicio de la campaña del Acuerdo durante el plebiscito). Las palabras de las mujeres ejemplifican lo anterior, *“la comunidad no se está reuniendo por miedo, somos pocos los que estamos siguiendo el proceso y existe mucha desinformación”* (Mujer de Buenos Aires), *“dicen que muchos de las FARC no querían desmovilizarse, que no han llegado a la zona”* (Mujer de Buenos Aires), *“se dice que algunos de las FARC, de los que están acá se han ido, no quieren estar ahí”* (Mujer de Buenos Aires).

Por otro lado, se encuentra también los cambios en las dinámicas económicas en el territorio, por los que las comunidades se sienten inseguras y afectadas por los acuerdos. Por ejemplo, en el municipio de Buenos Aires, las mujeres resaltan con preocupación que se *“están instalando muchos galpones a orillas del río Cauca que van a generar daño ambiental y el dueño de los galpones es un paramilitar”* (Mujer de Buenos Aires), y *“las personas se están quejando de la economía, la restricción de la coca, FARC-EP y gobierno no están interactuando con la comunidad”* (Mujer de Buenos Aires).

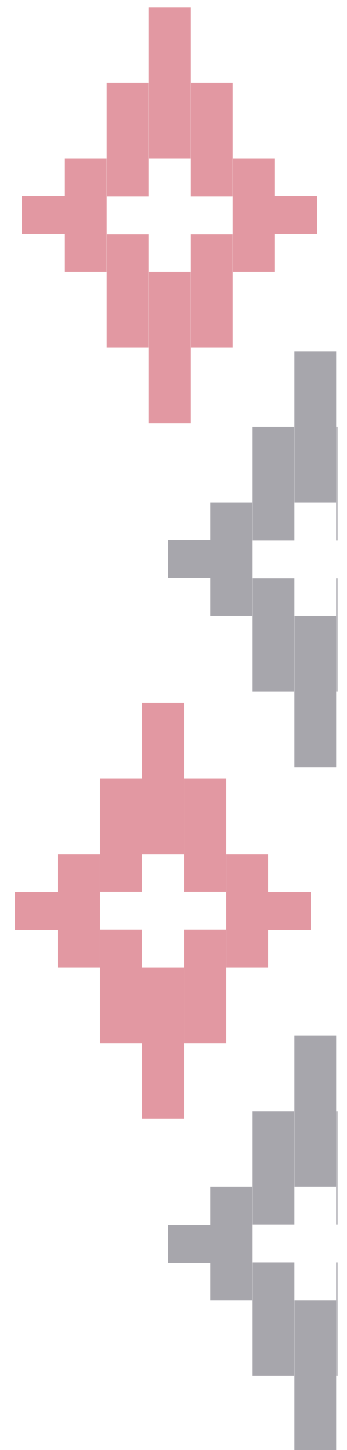
En cambio, quienes ejercen su derecho a la participación política y social, son víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, *“Si vamos a la Zona, dicen que somos guerrilleros (...) se escucha que los paramilitares van a entrar y van a empezar a eliminar a los líderes, como hicieron la vez pasada”* (Mujer de Buenos Aires).

El segundo elemento manifestado por las mujeres, es que las relaciones sociales se han visto afectadas por la continuidad de acciones bélicas e ilegales que tienen lugar en el territorio, como se ha mencionado

anteriormente, sin embargo, tiene lugar presentar algunas de las percepciones de las mujeres frente a las FARC: *“si a ellos no les cumplen, ellos retoman sus armas”* (Mujer de Buenos Aires), *“preocupante, por la falta de seriedad del Estado. No les está cumpliendo las garantías, ellos están en situaciones degradantes, mala alimentación y mala salud”* (Mujer de Buenos Aires), *“el Estado siempre firma acuerdos y nunca cumple”* (Mujer de Buenos Aires), y *“Yo vi a los comandantes de las FARC-EP pidiendo paz, llorando, ellos dijeron que el combate de ellos ya no será en el campo sino en la ciudad, si no les cumplen los acuerdos”* (Mujer de Buenos Aires).

De la valoración que hacen las mujeres se hace evidente la preocupación de ellas por el cumplimiento parcial de lo acordado, por parte del Estado con las FARC-EP, en materia de seguridad, reforma rural integral, participación política y sustitución de cultivos para uso ilícito, y las repercusiones que esto puede tener para las comunidades; en términos de reactivación del conflicto armado. También es clara la sensación de falta de voluntad de la institucionalidad para divulgar los acuerdos y de apoyar a las organizaciones y grupos de mujeres que quieren apostarle a construir un tejido social propicio para la construcción de la paz.

En medio de este complejo contexto, cuando se pregunta a las mujeres sobre *¿cómo se están percibiendo como sector social y político en los territorios?*, coinciden en que, si bien existen grupos de mujeres interesadas en participar activamente, en construir organizaciones sociales, la participación de las mujeres en los espacios de socialización del Acuerdo Final y de debate sobre los procesos de implementación sigue siendo limitada. Debido por un lado al desinterés y desmotivación de algunas mujeres, lo cual se asienta en los roles tradicionales que se les han



adjudicado a las mujeres que las constriñen al ámbito doméstico, pero también, la desconfianza se vincula a los temores asociados a participar y luego ser señaladas como guerrilleras. También está la falta de promoción desde la institucionalidad de estos procesos y la garantía de seguridad a las mujeres líderes.

Por último, al indagar por las estrategias de afrontamiento de las comunidades ante la sensación de miedo e inseguridad, se encuentra con preocupación que en el municipio de Buenos Aires la comunidad está adoptando medidas de aislamiento, restricción de movilidad en las noches, no participación en espacios de deliberación, información y capacitación: *“Tratar de no estar en tanto espacio”, que los niños no estén en la calle, encerrarse temprano, no salir*” (Mujer de Buenos Aires). Estas estrategias de afrontamiento se derivan de la experiencia vivida en la primera arremetida paramilitar.

Para finalizar recogiendo algunos de los análisis ya enunciados podemos hacer énfasis en que:

1) en la actualidad hay una clara disputa por el control de los territorios por parte de los otros actores armados que hacen parte del conflicto armado colombiano, lo cual pone en riesgo el proceso de reincorporación a la vida civil de las/os exguerrilleras/os y la seguridad de las mujeres y sus comunidades; 2) la fuerza pública no ha sido efectiva a la hora de mantener la seguridad en el territorio. Esto es un riesgo para la legitimidad del Estado y la legitimidad del Acuerdo; 3) las posibilidades de participación política, ejercicio de los liderazgos y seguridad de la vida e integridad de las mujeres no están siendo garantizadas. Esto tiene que ver con la negativa estatal de afrontar en los territorios las consecuencias de un fallido proceso de desmovilización paramilitar; 4) las violencias contra las mujeres esta aumentado, sobre todo en lo que tiene que ver con las amenazas y el amedrentamiento, al igual que se han aumentado los feminicidios; 5) en el municipio se está recreando un clima similar a la primera arremetida paramilitar. Lo que incrementa el miedo, el silencio y el aislamiento, y 6) no hay un dialogo entre el gobierno

y las comunidades. Se percibe una negligencia de la institucionalidad para atender de manera efectiva las demandas de seguridad de las mujeres y el apoyo a la participación

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

Los obstáculos tienen su asiento en situaciones estructurales de nivel socio-cultural y normativo. En relación con los primeros cabe destacar:

1. La débil respuesta institucional producto, en el caso de Buenos Aires, de la ausencia del estado en lo territorial, en materia de una adecuada, eficiente y eficaz política para la prevención, atención, protección, sanción e investigación de las violencias contra las mujeres;
2. El temor a las represalias por parte del agresor que muchas veces se traducen en amenazas explícitas; las lógicas y dinámicas del amor romántico; la poca legitimidad otorgada a la palabra y experiencia de las mujeres son factores que contribuyen a que las mujeres se retracten de la denuncia o de la solicitud de medidas de protección. Una adecuada intervención ante estos casos exige el análisis de la situación particular con el apoyo de profesionales con formación para atender estas situaciones, pero fundamentalmente requiere de entender el dolor de las mujeres y considerarlas como sujetos de derechos, y que por lo tanto la acción del Estado se da en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y no es producto de la buena voluntad de funcionarias/os que consideran a las mujeres como las "pobrecitas" sin recursos emocionales para responder a estas situaciones.

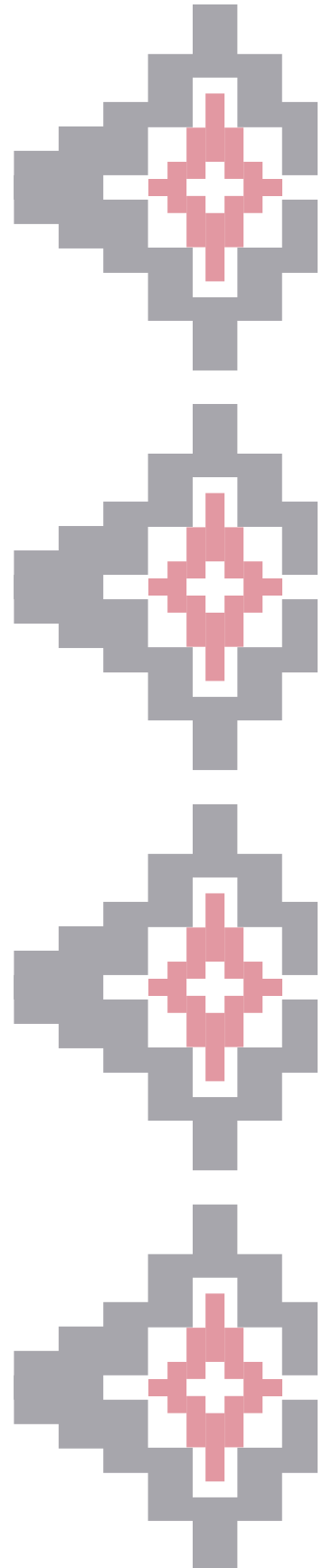
3. La falta de coordinación interinstitucional y entre la nación y el territorio; la persistencia de la naturalización de las violencias contra las mujeres, de prejuicios y estereotipos no solo de quienes tiene responsabilidades para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias; sino también, en las mujeres, las familias, las comunidades y los medios de comunicación.

En lo referente a los obstáculos de orden normativo algunos de los más significativos son:

1. El nivel de impunidad en delitos de mayor impacto contra las mujeres, que “supera el 80% y asciende hasta el 90% (...) lo cual significa que en materia penal las autoridades no aplican las causales de agravación punitiva y no se investigan, juzgan, ni sancionan los casos de acoso sexual ni de feminicidio” (Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08, 2013; 26), establecidos con Ley 1257 de 2008. A lo anterior, cabe agregar que la continua resistencia a reconocer y aplicar el agravante de feminicidio está determinada por una “cultura política de los operadores de justicia [que] sigue permeada por patrones de discriminación contra la mujer” (Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08, 2013; 27), reflejados en acciones que las re victimizan durante el proceso de investigación de los casos de violencia sexual, como lo es por ejemplo, la exigencia de niveles de prueba invasivos que no se ajustan a las complejidades de estos casos, otorgándole mayor peso a la misma y desestimando la palabra, la dignidad y la integridad la víctima, lo cual, al mismo tiempo, desincentiva la denuncia y aumenta la impunidad.
2. Otro obstáculo tiene que ver con los procesos penales adelantados por la Fiscalía, teniendo en cuenta la cantidad de casos de violencia intrafamiliar que se encuentran inactivos, y al mismo tiempo, el incremento de casos de un año a otro, sin justificación alguna por parte de la entidad. De igual manera, tampoco se ha garantizado el derecho de las mujeres a no ser

confrontadas con el agresor, como está establecido en la Ley 1257 de 2008, artículo 8 lit. k, pues como señala la Mesa "en todos los procedimientos de los crímenes de mayor impacto contra las mujeres **sigue siendo una práctica permanente llamarlas a conciliar con sus agresores como primera medida de procedimiento administrativo o judicial**" (Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08, 2013; 27).

3. La carencia de un sistema efectivo de defensoría para las mujeres víctimas de violencias, a pesar del mandato legal existente en la materia" (Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08, 2013; 27), sobre todo porque el Estado ha incumplido en su obligación de garantizar una orientación y asesoría jurídica "con carácter gratuito, inmediato y especializado" (Ley 1257 de 2008, artículo 8 lit. b) a partir del momento en que es denunciado el hecho de violencia. Esto obstaculiza la implementación de un modelo de protección integral para las mujeres.
4. El sistema para la atención, prevención, protección, sanción e investigación no da cuenta de los diversos sistemas de opresión que viven las mujeres ni de las situaciones afectivas que existen, en más de las veces, entre el agresor y la víctima. Tener en cuenta estas realidades obliga a no estandarizar las acciones porque la respuesta institucional debe partir de las situaciones que viven, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, las indígenas, las mujeres LTBI o quienes tienen un vínculo afectivo con quien es responsable de la agresión.
5. La persistencia de estereotipos y prejuicios en los y las operadores/as del sistema actúan también obstaculizando el efectivo acceso a la justicia y a las rutas de atención, prevención y protección de las



mujeres que sufren violencia y deciden denunciar o recurrir a la institucionalidad para solicitar medidas de protección y atención. Los estereotipos son construcciones sociales y culturales, o un grupo estructurado de creencias, sobre los atributos de varones y mujeres, que se fundan en sus diferentes funciones físicas, biológicas sexuales y sociales. Por ejemplo, entre los estereotipos de las mujeres pueden mencionarse que son madres –y por tanto principales responsables del cuidado de los/as hijos/as–, castas y obedientes, y en cuanto a rasgos de personalidad, son nerviosas o desequilibradas. Los estereotipos implican reducciones y generalizaciones que impiden cualquier consideración a las características individuales. Y en tanto establecen jerarquías entre las personas y asignan categorizaciones peyorativas o desvalorizaciones hacia las mujeres, son discriminatorios. Los estereotipos distorsionan las percepciones y, en la práctica judicial, conducen a decisiones que, en lugar de basarse en los hechos relevantes, se fundan en creencias y mitos preconcebidos.

Finalmente, un elemento que no ha sido problematizado públicamente lo suficiente está relacionado con la falta de articulación de la justicia ordinaria con las justicias propias para los casos de violencias contra las mujeres ocurridos en pueblos indígenas. Al respecto, es evidente el desconocimiento de las justicias propias por parte de las autoridades del Estado y, por ende, la brecha existente entre ambas impide el ejercicio y la garantía de los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

RECOMENDACIONES

Es urgente avanzar hacia la desmilitarización de la sociedad civil y la vida cotidiana, que tiene su arraigo en la apología de la guerra, la construcción de identidades heroicas alrededor del varón militar y en formas de relacionamiento jerarquizadas y de opresión. El militarismo ha penetrado el contexto cultural y relacional, naturalizando la subordinación, la obediencia, la no aceptación de la diferencia y la solución violenta de los conflictos. La apuesta por la desmilitarización, implica deconstruir la idea patriarcal que se tiene de seguridad; el eje central de la seguridad deben ser las personas y no los intereses del aparato estatal, del modelo económico o de la industria. Uno de nuestros retos como feministas es buscar transformaciones político-económicas que socaven los pilares del patriarcalismo y, a la vez, buscar soluciones culturales-valorativas para resaltar nuestra especificidad como colectividad menospreciada.

En el nivel nacional se insta:

A la Unidad de Investigaciones y Acusaciones para que en coordinación con las otras instancias de la JEP brinde las garantías procesales y probatorias para las mujeres víctimas, ofreciendo una asesoría adecuada y representación judicial en el marco del proceso ante la JEP. En este aspecto, el artículo 109 de la Ley Estatutaria crea el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, en este caso, es necesario que

esta garantía de representación judicial sea extendida en igualdad de condiciones a las víctimas, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos suficientes para asumir un proceso judicial.

A la Procuraduría General de la Nación para que vigile los estudios de riesgo (perfiles de quienes adelantan los estudios, criterios, procedimientos y resultados) llevados a cabo por la Unidad de Protección y las medidas que se les otorgan a las mujeres y sus familias.

A la Defensoría del Pueblo para que realice análisis de los riesgos que corren las mujeres por el ejercicio de sus liderazgos sociales y políticos, la defensa del Acuerdo Final y la exigencia de sus derechos.

A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que lideren, promuevan y acompañen canales directos de interlocución y consulta con las mujeres, en el territorio, para hacer seguimiento a las medidas en materia de protección, prevención, investigación, sanción

y garantías de repetición a favor de las mujeres víctimas y toda vulneración de nuestros derechos.

Al Ministerio de Educación para que formule y lleve a cabo procedimientos y mecanismos para generar información acerca de las medidas que toman las entidades territoriales, para evitar la deserción escolar de las niñas y las jóvenes víctimas de violencia, dando cumplimiento a lo planteado en la Ley 1257/08.

A los medios de comunicación para que contribuyan a desnaturalizar las violencias contra las mujeres, a romper con los estereotipos sexistas, racistas y discriminatorios, y a dignificar a las víctimas y evitar su revictimización.

En el nivel local se insta:

A las autoridades municipales y locales con competencias en la prevención, atención, investigación, sanción y garantías de no repetición a: a) Crear dentro de su estructura de gobierno local, un organismo específico, con la autonomía y los recursos suficientes y propios

para la organización, gestión y desarrollo efectivo de las políticas para las mujeres; b) Fortalecer y adaptar las Rutas de Atención Integral para las mujeres, niñas y jóvenes víctimas de las violencias, con profesionales idóneos/as y competentes; c) Tener en cuenta la participación de las mujeres y de sus organizaciones en los programas y acciones de prevención de las violencias, y a fortalecer la mesa departamental y municipal de mujeres, los comités de seguimiento a la Ley 1257/08 y las mesas interinstitucionales de violencias; d) Formular y llevar a cabo a través del sistema educativo estrategias orientadas a eliminar prácticas sexistas, discriminatorias y las violencias en los espacios educativos en todos los niveles, además de involucrar a la comunidad educativa en la protección de las niñas y adolescentes víctimas de violencias o riesgo de serlo; e) Destinar recursos económicos y técnicos para formular y llevar a cabo programas y acciones conducentes a implementar efectivamente la Ley 1257/08; y f) Diseñar y poner en marcha un sistema de información departamental y local que dé cuenta de la magnitud de la violencia contra las mujeres en sus diversidades identitarias, de las formas de violencia, del perfil de los agresores/as y de los espacios de ocurrencia, de manera que se puedan formular políticas y programas que respondan a los contextos socio-culturales y a las necesidades y realidades de las mujeres.

A las autoridades indígenas y a los consejos comunitarios a unificar las rutas de atención para agilizar los procesos de investigación y sanción de los hechos de violencia perpetrados contra las mujeres indígenas e incluir en los planes de vida y en el plan de desarrollo departamental y municipal acciones integrales para la atención y protección a las mujeres afro descendientes e indígenas.



BIBLIOGRAFÍA

- ◊ Alcaldía Municipio Buenos Aires, Plan de Desarrollo Municipal, Construyendo con la gente para la gente, 2016–2019.
- ◊ Defensoría del Pueblo (2018), Panorama de los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca, Informe Ejecutivo, Bogotá, D.C.
- ◊ Díaz, Genica y Carvajal, Isabela (2016) La violencia sexual y de género: el continuum entre la guerra y la paz, Bogotá, D.C.
- ◊ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). Forensis, Datos para la vida. Bogotá, D.C.
- ◊ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2017). Forensis, Datos para la vida, Bogotá, D.C.
- ◊ Jonasdotir, Anna C (1993), El poder del amor ¿Le importa el sexo a la democracia?, Madrid, Ediciones Cátedra.
- ◊ Young, Iris Marion, (2000), La justicia y la política de la diferencia, Ediciones Cátedra, Madrid.
- ◊ Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, (2013), Ley 1257 Cinco años después... II Informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008, Bogotá, D.C.
- ◊ Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. (2018), 10 años Ley 1257: Por una Vida Libre

de Violencias con las Mujeres, Bogotá, D.C.

- ♦ Juzgado Promiscuo Municipal de Buenos Aires, Cauca. Oficio Nro.564. (2018).

Páginas web consultadas

- ♦ Caracol Radio (2017). Amenazan a mujeres LGBTI en Cauca. Popayán, Colombia. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/05/15/popayan/1494877859_200839.html
- ♦ Caracol Radio. (16 de agosto del 2018). Una zona veredal cercana a donde murió Alfonso Cano. Recuperado de: http://caracol.com.co/radio/2016/07/08/nacional/1467998945_553920.html
- ♦ El Espectador (2017). Devolviéndole la vida al río Cauca. Colombia. Recuperado de: <http://colombia2020.elespectador.com/territorio/devolviendole-la-vida-al-rio-cauca>
- ♦ El pilón (2017). Mujeres maltratadas son revictimizadas por los funcionarios que las atienden. Colombia. Recuperado de: <http://elpilon.com.co/mujeres-maltratadas-revictimizadas-los-funcionarios-las-atienden/>
- ♦ El Tiempo (2017) "Colcha" de paz cobijará la zona veredal de Caldono. Colombia. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/cali/calenos-tejen-telares-de-paz-para-excombatientes-de-las-farc-82910>
- ♦ Fundación paz y reconciliación (2017). Observatorio: Violencia política en Colombia 2013-2017. Colombia. Recuperado de: <http://lideres.pares.com.co/>

- ◇ La Silla Vacía (2017). La paz, por dentro y por fuera. Colombia Recuperado de: <http://lasillavacia.com/historia/la-paz-por-dentro-y-por-fuera-60821>
- ◇ Muñoz, Federico. N.d. Buenos Aires – Cauca: Ancestrales costumbres, procesos de destierro y conflictos sociales, políticos, armados. Disponible en https://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/8-Munoz-Destierro%20y%20conflicto%20municipio%20del%20Cauca.pdf
- ◇ Proclama del Cauca. (2017). Informe de seguimiento al avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Alcalde de Buenos Aires con la ciudadanía en el año 2015. Recuperado de: <https://es.calameo.com/read/000072167de3cfd1d262b>
- ◇ Radio Macondo. (2017). Situación de DDHH no mejora en el Cauca. Colombia. Recuperado de: <http://radiomacondo.fm/2017/05/13/situacion-ddhh-no-mejora-cauca/>
- ◇ Radio Súper Popayán (2017). 20 mujeres han sido asesinadas en el Cauca en lo corrido del 2017. Popayán, Colombia. Recuperado de: <https://www.radiosuperpopayan.com/2017/05/09/20-mujeres-han-sido-asesinadas-en-el-cauca-en-lo-corrido-del-2017/>
- ◇ Red Nacional de Información. (2018). Actualización de datos. <https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>
- ◇ Unidad para las Víctimas. Buenos Aires, Cauca, un espacio por las víctimas y por la Paz. <http://www.unidadvictimas.gov.co/es/nomeolvides/buenos-aires-cauca-un-espacio-por-las-victimas-y-por-la-paz/41476>

“Nosotras las mujeres de Buenos Aires, hacemos un llamado perentorio para que no sigamos siendo blanco del conflicto y se tomen medidas inmediatas de proteger a las mujeres para que puedan ejercer la labor de lideresas defensoras de los derechos humanos” (Mujer de Buenos Aires).

“La violencia estructural que se vive en el territorio nos obliga a recordar toda historia que hemos vivido durante largos años, y miramos con preocupación cómo se siguen vulnerando los derechos de las mujeres” (Mujer de Buenos Aires).

Las mujeres los sentimos desprotegidas por que las instituciones del estado hacen caso omiso para defender nuestras situaciones” (Mujer de Buenos Aires).

CON EL APOYO DE:



Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament



OXFAM